



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

GRADO EN HISTORIA

TRABAJO DE FIN DE GRADO

TÍTULO: Desde abajo y en la periferia: protesta social en el mundo rural durante el tardofranquismo y la Transición española (1962-1979)

TITLE: From below and in the periphery: social protest in the rural world during the latefrancoism and the Spanish Transition (1962-1979)

AUTOR: Diego Latorre Manglano

TUTOR: Óscar Bascuñán Añover

CURSO ACADÉMICO: 2018-2019

CONVOCATORIA: junio

Resumen: El proceso de democratización en España es uno de los temas que más interesa a los investigadores sociales en la actualidad. Los historiadores han ido abandonando una forma de estudio centrada en un cierto determinismo para poner el foco en los sujetos sociales. La sociedad civil y los movimientos sociales fueron actores determinantes en la construcción de la democracia en nuestro país. Pero, aunque los estudios “desde abajo” cada vez son más numerosos, todavía hoy hay un cierto olvido del mundo rural. En el campo también existieron movimientos antifranquistas y de protesta potentes que desafiaron la dictadura de formas muy diversas. A través del marco teórico proporcionado por los sociólogos de la nueva teoría del conflicto social se establecen unas líneas interpretativas que permiten explicar el fenómeno de la democratización rural de forma más compleja y no determinista.

Palabras clave: Protesta social, conflicto, estructura de oportunidad, estructura de organización, procesos enmarcadores, franquismo, Transición.

Abstract: The democratization process in Spain is one of the most interesting topics for social researchers nowadays. Historians have progressively abandoned a focus on a determinist way of studying to focus on social subjects. Civil society and social movements were determinant actors in the construction of democracy in our country. However, even though research “from below” is growing, there is still a certain overlooking of rural world. Also, in the countryside there were strong antifrancoism and protest movements which challenged the dictatorship in very diverse ways. Concepts that help to explain the rural democratization in a more complex and no determinist way are set through the theoretical framework built by the new social conflict theory sociologist.

Key words: Social protest, conflicto, oportunitiy estrcuture, organization structure, framing processes, francoism, Transition

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
1.1 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA	4
1.2 OBJETIVOS.....	11
1.3 ESTADO DE LA CUESTIÓN.....	12
2. DESARROLLO	22
2.1. ESTRUCTURA DE OPORTUNIDAD POLÍTICA Y PROTESTA SOCIAL.....	22
2.2. ACTORES Y FORMAS DE LA PROTESTA	32
2.3 LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA.....	47
3. CONCLUSIONES	55
4. BIBLIOGRAFÍA.....	60

1. INTRODUCCIÓN

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

El proceso de democratización en España se convirtió desde el primer momento en un mito fundacional de un nuevo ciclo en la historia del país. Por su gran impacto político y social, la Transición se ha convertido en uno de los principales temas de discusión de políticos, sociólogos e historiadores. Aunque su relevancia no ha llegado al mismo tiempo a todas las disciplinas. Algunos historiadores se lamentan de que mientras que desde la década de los setenta ya hay politólogos y sociólogos estudiando el proceso, los historiadores españoles no le prestan gran atención hasta bien entrados los noventa¹. Parece evidente este predominio de la sociología cuando Santos Juliá, para valorar que ya durante la Transición se estaban haciendo análisis de gran valor, tiene que recurrir a un sociólogo como José María Maravall². Pero no se puede negar que desde la década de los noventa y, sobre todo, con el nuevo siglo, los historiadores están realizando múltiples obras de gran valor sobre este periodo y que abordan diversos temas y enfoques, como ponen en evidencia los más que valiosos esfuerzos de Carme Molinero, Pere Ysàs o Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz. Aun así, muy lejos de la afirmación de Juan José Linz, en 1996, de que “la transición es ya historia, no es algo que hoy sea objeto de debate o lucha política, hoy es objeto científico”, en la actualidad la Transición se ha convertido en objeto de lucha política a raíz de la crisis económica de 2008, la crisis del modelo de partidos bipartidista, la creciente puesta en duda de la institución monárquica o el recrudecimiento del conflicto de Cataluña³. Esta vuelta a la Transición como relato político en un momento de crisis institucional seguramente tenga mucho que ver con la idea que señala Xavier Domènech de que la construcción ideológica alrededor de este periodo tiene la capacidad de restaurar legitimidades o, por el contrario, de ponerlas en duda (la Monarquía o la anticonstitucionalidad del derecho de autodeterminación son ejemplos muy claros)⁴. Parece evidente que desde hace varios

¹ Javier Tusell y Álvaro Soto Carmona, “Introducción”, en *Historia de la Transición (1975-1986)*, eds. Javier Tusell y Álvaro Soto (Madrid: Alianza Editorial, 1996), 17-19.

² Santos Juliá, “Cosas que de la Transición se cuentan”, *Ayer. Revista de Historia Contemporánea* 79 (2010: 3): 298-299.

³ Cita de Juan José Linz en: Juan J. Linz, “La Transición española en perspectiva comparada”, en *Historia de la Transición (1975-1986)*, eds. Javier Tusell y Álvaro Soto (Madrid: Alianza Editorial, 1996), 21.

⁴ Xavier Domènech Sampere, “El cambio político desde abajo (1962-1976)”, *Mientras tanto* 90 (2004): 58-59.

años se ha agotado el “echar al olvido” del que hablaba Santos Juliá⁵. Este historiador revalorizaba el olvido, un fenómeno activo y consciente, como un proceso necesario para construir un futuro mejor. Pero con unas instituciones democráticas consolidadas parece resurgir la necesidad de potenciar la memoria sobre un pasado conflictivo. Halbwachs diferencia entre historia y memoria. Aunque plantea una visión demasiado tradicional de la historia en la que parece que solo caben los documentos escritos, puede ser útil atender a su idea de que mientras que la historia se centra en las diferencias y rupturas con la normalidad y analiza a los grupos sociales desde fuera, la memoria se centra en las similitudes y analiza al grupo desde dentro para generar identidad y cohesión⁶. Es aquí donde tiene que poner sus esfuerzos el historiador, pues, como señala Carme Molinero, es necesario que la historia informe a la memoria⁷. La labor historiográfica en relación con el estudio de la Transición está dando muy buenos resultados con obras complejas y de gran riqueza, pero el problema viene con la difusión de estos análisis. Los historiadores no consiguen conectar con el público general y la gran mayoría de sus conclusiones no consiguen ir más allá del ámbito endogámico de la academia. De todos modos, este es un problema demasiado ambicioso que requeriría esfuerzos múltiples y en el que no se pretende indagar ni mucho menos dar solución en este trabajo.

Los análisis sobre la Transición se han centrado en múltiples modelos explicativos, en ocasiones obviando unos o excluyendo a todos menos uno. José R. Díaz Gijón agrupa estos modelos en teorías estructuralistas, aquellas que explican el proceso como fruto de condiciones objetivas, y en teorías referidas a los actores sociales, aquellas que se centran en la actuación de dichos actores para explicar el devenir histórico⁸. Ejemplos del primer caso son los estudios que intentan explicar el inicio de la Transición como fruto de la modernización económica del país, algo que tenía que llevar indudablemente a la democracia liberal. En el segundo caso se insertarían los estudios que presentan el proceso como resultado de la acción del

⁵ Cita de Santos Juliá en: Santos Juliá, “Echar al olvido. Memoria y amnistía en la transición a la democracia”, *Claves de Razón Práctica* 129 (2003: enero): 104-125.

⁶ Maurice Halbwachs, “Memoria colectiva y memoria histórica”, *Revista española de investigaciones sociológicas* 69 (1995): 209-219.

⁷ Carme Molinero, “Treinta años después. La Transición revisada”, en *La Transición, treinta años después*, ed. Carme Molinero (Barcelona: Ediciones Península, 2006), 23.

⁸ José R. Díaz Gijón, “Estrategias de análisis y modelos de Transición a la democracia”, en *Historia de la Transición (1975-1986)*, eds. Javier Tusell y Álvaro Soto (Madrid: Alianza Editorial, 1996), 93.

movimiento obrero y otros movimientos de protesta como el vecinal y el estudiantil o aquellos trabajos que ponen el foco en los grandes hombres que planificaron y desarrollaron la democratización política. Como bien señala Díaz Gijón, es necesario prestar atención a todos estos modelos explicativos para desarrollar un análisis multifactorial y pluricausal. Por otro lado, es un punto común entre historiadores el afirmar que hay dos discursos con amplia aceptación social. Estos discursos son totalmente antagónicos y llegan a conclusiones muy diferentes, pero se basan en los mismos supuestos: liderazgo de las élites en el proceso, subordinación de la oposición y el movimiento obrero, Transición como momento de pasividad social y desmovilización, etc. Por supuesto, estos relatos no son plenamente homogéneos y pueden presentar diferencias internas, pero para lo que aquí se pretende, señalar sus limitaciones y denunciar una excesiva sencillez que les hace caer en falsedades, vale con anunciar algunos puntos en común. Un primer discurso formulado por las élites protagonistas de la Transición explica el proceso como impulsado “desde arriba”, planeado de antemano y exento de grandes contratiempos gracias a la madurez de la sociedad española del momento que entendió la importancia de no apoyar proyectos radicales. Este discurso es muy recurrente dentro de las élites franquistas que después desarrollaron un papel protagonista durante la Transición porque les permite legitimarse como demócratas convencidos. El segundo relato suele ser formulado por aquellos que quedaron marginados del proceso por la falta de apoyo social debido a la radicalidad de sus propuestas o por sus herederos ideológicos. Este discurso trata de deslegitimar el actual modelo político, económico y social argumentando que la Transición no rompió con el pasado franquista y que fue la continuidad lo que predominó en las instituciones estatales⁹. Santos Juliá señala numerosos ejemplos de intelectuales que recurren a la denuncia de una supuesta historia oficial que mete en el mismo saco a relatos muy diferentes. Estos intelectuales pretenden dar mayor valor a sus estudios haciéndolos parecer más críticos y profundos frente a otros supuestamente simplistas y legitimadores del orden social por acrílicos¹⁰. No es la intención de este párrafo, ni se pretende originalidad, simplemente se señala una

⁹ Carme Molinero y Pere Ysàs, *La Transición. Historia y relatos* (Madrid: Siglo XXI de España Editores, 2018), 245-283. Y Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, “La Transición a la democracia: una perspectiva historiográfica”, en *Historia de la Transición en España. Los inicios del proceso democratizador*, coord. Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz (Madrid: Biblioteca Nueva, 2007), 17.

¹⁰ Santos Juliá, “Cosas que de la Transición se cuentan”, *Ayer. Revista de Historia Contemporánea* 79 (2010: 3): 302-309.

cuestión que ha preocupado, en mayor o menor medida, a la mayoría de los historiadores de la Transición.

La gran extensión de estos relatos hace evidente que hay una gran preocupación social en torno a la construcción de la democracia española, y mientras exista esta preocupación seguirá siendo necesario enriquecer el objeto de estudio para intentar acabar con los relatos simplistas. Una propuesta con un gran atractivo es la que plantean Julio Aróstegui Sánchez, Juan Sánchez González y Julio Pérez Serrano en la primera parte de *Historia de la Transición en España. Los inicios del proceso democratizador*. Plantean un enfoque propio de la historia del tiempo presente para el estudio de la Transición¹¹. Aunque aquí no se persigue profundizar en estos planteamientos, la vinculación que señalan de este pasado con el presente por su carácter de mito fundacional y por su gran peso en la memoria colectiva es relevante a la hora de enfatizar la necesidad de desarrollar estudios sobre este periodo. Sobre todo, en un momento en el que, como ya se ha señalado, los grandes pactos y frutos de la Transición se están poniendo en duda (crisis del sistema de partidos bipartidista y cuestionamiento de la Monarquía, de la Constitución y del marco autonómico). Dentro de este esfuerzo es dónde pretende hacerse un hueco este ensayo, vinculado a una corriente de estudio que quiere crear un modelo explicativo “desde abajo”, es decir, explicar la Transición como un proceso en el que la sociedad civil fue un actor principal gracias a la movilización obrera, en un primer momento, y que se extendió rápidamente a otros grupos como el movimiento vecinal, feminista, estudiantil, etc. Esta perspectiva “desde abajo” sirve para romper con las explicaciones deterministas que ven este periodo como la secuencia lógica de las condiciones objetivas sociales y económicas que se venían dando en España desde los años sesenta, pues otorga el protagonismo a la sociedad civil u oposición

¹¹ Julio Aróstegui Sánchez, “La Transición a la democracia. <<Matriz>> de nuestro tiempo reciente”, en *Historia de la Transición en España. Los inicios del proceso democratizador*, coord. Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz (Madrid: Biblioteca Nueva, 2007), 36-42; Juan Sánchez González, “La historia del tiempo presente en España y los estudios sobre la Transición democrática española: un balance y algunas reflexiones”, en *Historia de la Transición en España. Los inicios del proceso democratizador*, coord. Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz (Madrid: Biblioteca Nueva, 2007), 45-59; y Julio Pérez Serrano, “La Transición a la democracia como modelo analítico para la historia del presente: un balance crítico”, en *Historia de la Transición en España. Los inicios del proceso democratizador*, coord. Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz (Madrid: Biblioteca Nueva, 2007), 61-75.

democrática como principal motor del cambio democrático¹². Además, también sirve para enfrentar la idea de la Transición como periodo de desmovilización y de pasividad de la sociedad¹³. Pero, en la práctica, ¿qué significa una perspectiva “desde abajo”? Para responder a esta pregunta es necesario prestar atención a los brillantes trabajos de Xavier Domènech y Encarna Nicolás Marín. En resumen, significaría atender a dos hipótesis como punto de partida: que para la democracia española la movilización popular fue esencial y que la mayor parte de la protesta tuvo lugar en un contexto local¹⁴. En los sesenta cambió la estructura de oportunidad por varios motivos entre los que se pueden destacar el aumento de expectativas de los individuos debido al desarrollo económico, la negociación de nuevos convenios o la división entre las élites por el proceso de institucionalización del régimen. En este contexto aumentó la movilización obrera, que se extendió a lo largo de la década y, sobre todo, durante la primera mitad de los setenta a otros actores sociales (intelectuales, estudiantes, mujeres, profesionales, etc). Esta situación de conflictividad estallaría con la oportunidad política que supuso el aumento de división entre las autoridades tras la muerte de Franco que impidió la continuidad del proyecto promovido por el gobierno Arias, viéndose obligado el gobierno de Suárez a llevar a cabo reformas que iban a romper con las instituciones franquistas y que consolidaron la democracia. Por tanto, es evidente que, al menos hasta las elecciones de junio de 1977, son los movimientos sociales los que impulsaron la democratización en España. Esta conclusión no es nueva en estudios de procesos de democratización internacionales. El sociólogo Charles Tilly da gran importancia a los movimientos sociales como conformadores de la democracia y la soberanía popular. Pero una perspectiva “desde abajo” no significa olvidarse de las siglas ni de los partidos. El foco de atención se debe poner sobre aquellos sujetos que tuvieron capacidad para alterar el orden político, y, claramente,

¹² Sobre los términos de oposición y sociedad civil: Monica Threfall, “Una reevaluación del papel de las organizaciones de la sociedad civil en la Transición”, en *Conflicto y consenso en la Transición española*, coord. Gutmaro Gómez Bravo (Madrid: Editorial Pablo Iglesias, 2009), 160-191. Aunque esta autora afirme que durante la Transición es más adecuado hablar de oposición democrática que de sociedad civil, en este trabajo se empleará el primer término para aquellos movimientos más involucrados en la lucha antifranquista y el segundo para hablar del conjunto de la sociedad en general.

¹³ Ejemplo de este tipo de relatos: Cayo Sastre García, *Transición y desmovilización política en España (1975-1978)* (Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico – Universidad de Valladolid, 1997)

¹⁴ Xavier Domènech Sampere, “El cambio político (1962-1976) Materiales para una perspectiva desde abajo”, *Historia del presente* 1 (2002): 46-67; y Encarna Nicolás Marín, “<<La Transición se hizo en los pueblos>> La vida política en Murcia (1968-1977)”, en *Historia de la Transición en España. Los inicios del proceso democratizador*, coord. Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz (Madrid: Biblioteca Nueva, 2007), 251-267.

los sindicatos fueron uno de estos sujetos. La movilización tuvo mucho más peso en el ámbito local que en el ámbito nacional, aunque respondiesen a reivindicaciones que iban más allá de su espacio geográfico. La huelga general pacífica que defendía el PCE nunca llegó a materializarse en el ámbito nacional, pero sí que se puede hablar de huelgas generales locales que consiguieron paralizar sus respectivas ciudades, como la huelga de febrero de 1976 en Sabadell o la que tuvo lugar el mes siguiente en Vitoria. Dentro del ámbito local tiene gran importancia el estudio del ámbito provincial y el mundo rural, espacio de protesta que no suele verse privilegiado dentro de los estudios de la Transición, por su importancia demográfica, por la oportunidad que otorga a este tipo de análisis y por sus características propias en un contexto de clara tendencia urbanizante. Es cierto que fue en las zonas industriales y urbanas donde se produjo la mayor actividad de rebelión abierta contra el régimen, como señalan los datos del estudio de Ignacio Sánchez-Cuenca y Paloma Aguilar Fernández. Pero Óscar J. Martín García deja claro que esto no significa que en el mundo rural la aceptación de la legalidad franquista fuese generalizada, sino que por sus condiciones concretas tuvieron que desarrollarse otras formas de protesta menos directas¹⁵. Desde el campo español también se desarrollaron formas de subversión que alteraban el orden institucional y preocupaban a las autoridades. Aunque cada vez son más los estudios sobre la democratización española que ponen su atención en el mundo rural, todavía existen claras limitaciones fruto de una tradición obrera que estudia el conflicto obviando a los campesinos. Como denuncia Óscar Bascuñán, la tradición militante obrera de la historia social ha provocado que los campesinos se hayan dejado de lado para explicar los procesos de cambio social en los países europeos en los siglos contemporáneos o que cuando se les ha prestado atención haya sido bajo estereotipos de pasividad, ignorancia y sumisión¹⁶. Estas limitaciones hacen que en el caso concreto del tardofranquismo y la Transición todavía haya zonas como Extremadura, Castilla La Vieja o los territorios insulares que están muy poco estudiadas. Es por eso por lo que aquí se va a poner el foco en tres regiones que

¹⁵ Ignacio Sánchez-Cuenca y Paloma Aguilar Fernández, “Violencia política y movilización social en la Transición española”, en *Violencia y transiciones políticas a finales del siglo XX. Europa del Sur – América Latina*, eds. Sophie Baby, Olivier Campagnon y Eduardo González Calleja (Madrid: Casa de Velázquez, 2009): 105-106; y Óscar J. Martín García, *A tientas con la democracia. Movilización, actitudes y cambio en la provincia de Albacete, 1966-1977* (Madrid: Catarata, 2008): 49.

¹⁶ Óscar Bascuñán Añover, *Campesinos rebeldes. Las luchas del campesinado entre la modernización y la globalización* (Madrid: Catarata, 2009): 9-23.

gracias a proyectos como el de *Movimientos sociales en Castilla La-Mancha durante el segundo franquismo y la Transición (1959-1979)* o el de *Mobilización política e conflictividade social na Galicia rural do tardofranquismo e a Transición (1960-1982)* y a historiadores como Daniel Lanero, Ana Cabanas, Manuel Ortiz Heras, Óscar J. Martín García, Damián A. Madrid González o Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoza, entre muchos otros, tienen una amplia bibliografía. Estas regiones son las de Galicia, Albacete y Andalucía. Además de por la abundancia y calidad de trabajos, estos espacios geográficos son apropiados en conjunto para mostrar realidades rurales diferentes entre sí, lo que permite mostrar la complejidad y la diversidad real existente dentro del mundo rural más allá de prejuicios que lo presentan como un todo homogéneo.

Por último, para analizar la Transición “desde abajo” es necesario atender a dos cuestiones que no suelen tratarse en la mayoría de los estudios: el término de Transición en sí mismo y una cronología amplia. Como señala Xavier Domènech, al usarse el término de Transición este periodo se define a sí mismo por su situación previa, el franquismo, y por lo que provocaría, la democracia. Es decir, no dice nada de sí mismo y se considera que su única importancia se deriva de lo que devino¹⁷. En esta misma línea, Juan Sánchez González afirma que una de las principales carencias de muchos estudios sobre este momento es el de entenderlo como un periodo más de la historia de España¹⁸. Si atendemos a los esfuerzos del régimen para institucionalizarse y para conseguir su continuidad tras la muerte de Franco no se puede hablar de que la Transición comience con la muerte de Franco, sino que, hasta enero de 1977, cuando se hace efectiva la Ley para la Reforma Política, seguiría vivo una especie de tardofranquismo¹⁹. Aunque este debate parezca baladí no lo es, pues es necesario para el siguiente punto, una cronología amplia. En la mayoría de los casos se usan fechas menos extensas. Hay un consenso que suele establecer el inicio de la Transición con la muerte de Carrero Blanco en diciembre de 1973 o con la de Franco en noviembre de 1975 para finalizar en 1982 con la victoria socialistas en las

¹⁷ Xavier Domènech Sampere, “El cambio político (1962-1976) Materiales para una perspectiva desde abajo”, *Historia del presente* 1 (2002): 46.

¹⁸ Juan Sánchez González, “La historia del tiempo presente en España y los estudios sobre la Transición democrática española: un balance y algunas reflexiones”, en *Historia de la Transición en España. Los inicios del proceso democratizador*, coord. Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz (Madrid: Biblioteca Nueva, 2007), 56-59.

¹⁹ Xavier Domènech Sampere, “El cambio político desde abajo (1962-1976)”, *Mientras tanto* 90 (2004): 64.

elecciones generales o en 1986 con la plena integración internacional tras la entrada de España en la OTAN y en la CEE. Si atendemos a la movilización social parece más adecuado, como defienden Pere Ysàs, Xavier Domènech y Damián A. González Madrid y Óscar J. Martín García, iniciar el análisis con las transformaciones sociales que están teniendo lugar en la década de los sesenta y que están generalizando un cambio a favor de la democracia en la opinión pública, y, más concretamente desde el ciclo de huelgas de 1962²⁰. El punto final se pone en las elecciones municipales que tienen lugar en abril de 1979, cuando los alcaldes franquistas son sustituidos por cargos electos democráticamente y gran parte de los individuos que habían participado en los movimientos sociales locales y vecinales entran en las instituciones. En estos momentos la movilización social cae cualitativamente porque pasa a la defensiva en el sentido de intentar no perder posiciones sociales y económicas²¹. Por tanto, este estudio pretende poner el foco principalmente en aquellos años del tardofranquismo y la Transición que están marcados por una fuerte protesta que se demuestra como un factor explicativo clave del modelo de democratización español.

1.2 OBJETIVOS

El trabajo se va a estructurar a través de tres cuestiones centrales que se responderán en los diferentes apartados. Para empezar, en el apartado 2.1 se va a abordar la siguiente cuestión: ¿hubo un repunte de la movilización y la protesta en ámbitos provinciales eminentemente rurales paralelo o similar al de los centros industriales y urbanos? Existe un fuerte consenso sobre la idea de que una de las características principales de la crisis franquista de la década de los sesenta que puso las bases para imposibilitar la continuidad de la dictadura sin Franco fue la oleada de huelgas, manifestaciones y todo tipo de protesta en las zonas más desarrolladas económica y demográficamente. Pero ¿fue la contestación al Franquismo algo

²⁰ Pere Ysàs, “¿Una sociedad pasiva? Actitudes, activismo y conflictividad social en el franquismo tardío”, *Ayer* 68 (2007: 4): 33-36; Xavier Domènech Sampere, “El cambio político (1962-1976) Materiales para una perspectiva desde abajo”, *Historia del presente* 1 (2002): 51; y Damián A. González Madrid y Óscar J. Martín García, “Desde abajo y en la periferia del desarrollismo. Cambio político y conflictividad social en La Mancha, 1962-1977”, en *El Franquismo y la Transición en España. Desmitificación y reconstrucción de la memoria de una época*, coord. Damián A. González Madrid (Madrid: Catarata, 2008): 126.

²¹ Álvaro Soto Carmona, *Transición y cambio en España 1975-1996* (Madrid: Alianza Editorial: 2005), 53-57; Álvaro Soto Carmona, “Conflictividad social y transición sindical”, en *Historia de la Transición (1975-1986)*, eds. Javier Tusell y Álvaro Soto Carmona (Madrid: Alianza Editorial, 1996), 378; y Álvaro Soto Carmona, “Los pactos en las transiciones democráticas. España: 1975-1982”, *Aportes: revista de historia contemporánea* 97 (2017): 227-228.

exclusivo de estas áreas o se produjo también en zonas rurales? En segundo lugar, ¿cuáles fueron las motivaciones y lógicas de esas acciones? ¿responden a las mismas lógicas que en los ámbitos industriales y urbanos? Estas dos preguntas se van a tratar en el apartado 2.2. La crisis del Franquismo primero y la muerte del dictador después generaron un nuevo marco de oportunidades políticas que fue aprovechado por las fuerzas antifranquistas. Estas fuerzas crearon unas formas de organización y unos marcos colectivos concretos para combatir todos los aspectos sociales del Franquismo en las zonas urbanas. Lo que se pretende resolver es si en las zonas rurales los movimientos opositores crearon lógicas y formas de actuación propias para afrontar sus problemas locales o imitaron un modelo impuesto desde las zonas más desarrolladas. Por último, en el apartado 2.3, se cierra el trabajo respondiendo a ¿fueron estas acciones formas de oponerse al Franquismo? ¿contribuyeron al proceso de democratización “desde abajo”? La movilización social durante los sesenta y primera mitad de los setenta tuvo motivaciones muy variadas, siendo una de las más recurrentes la lucha por mejoras laborales. Pero en las zonas más combativas, las limitaciones participativas y para la protesta por cauces legales propia de la legalidad franquista y la colaboración entre el Estado y los poderes económicos facilitaron que las protestas de los diferentes movimientos sociales adquiriesen un fuerte deseo de libertad y democracia ¿Ocurrió esto también en las zonas rurales donde la protesta abierta fue menor y dónde la lucha por las libertades suponía un riesgo mayor?

1.3 ESTADO DE LA CUESTIÓN

Como señala brevemente Daniel Lanero en el Estado de la Cuestión que abre *Por surcos y calles. Movilización social e identidades en Galicia y País Vasco (1968-1980)*, los estudios sobre la Transición que se centran en el conflicto existen desde el mismo momento que se inicia el proceso. Atienden incluso, aunque siempre en menor número, al ámbito rural. Estos estudios pioneros, de las décadas de los setenta y ochenta, estuvieron marcados por una fuerte interpretación marxista y estructuralista definida por la propia agenda de los actores políticos y sociales del momento. Ya en los ochenta y en los noventa se empezó a perder el carácter militante de estos

estudios pero todavía se mantuvo un cierto marxismo teórico²². El marxismo estudia el conflicto a través de la premisa central de que es inherente a todo sistema social por la existencia de unas clases sociales con intereses antagónicos e incompatibles. Por tanto, el enfrentamiento entre dichas clases es el motor del cambio social, político y económico. Las clases sociales están determinadas por su posición en las relaciones de producción, por lo que es evidente que para el marxismo el conflicto social tiene un origen fundamentalmente socioeconómico. Aunque en los años sesenta la escuela de marxistas ingleses liderada por E. P. Thompson introdujo una serie de innovaciones centradas principalmente en dar mayor importancia a la cuestión de la cultura, los análisis marxistas suelen estar caracterizados por un gran peso de las cuestiones económicas y de un cierto determinismo²³.

En la década de los noventa y sobre todo con el cambio de siglo, los estudios del conflicto de carácter marxista abren paso a una nueva tendencia que irá ganando cada vez más adeptos. Estas nuevas teorías del conflicto social ponen a las comunidades y organizaciones que generan la movilización como el eje central del estudio y como principal foco de acción. Es pionero en introducir este enfoque en el estudio de la Transición Joe Foweraker en *La democracia española. Los verdaderos artífices de la democracia en España*²⁴. Foweraker deja claro desde la primera página la importancia de la perspectiva “desde abajo” como forma de construcción democrática y su uso de las entrevistas consigue que elabore capítulos de gran valor para entender la organización interna del antifranquismo como el dedicado las tradiciones ideológicas en condiciones de clandestinidad. Los principales referentes de las nuevas teorías del conflicto social y los que han marcado el camino teórico y conceptual a seguir por gran parte de historiadores de la Transición son el sociólogo Charles Tilly y sus seguidores, destacando nombres como Sidney Tarrow, Dough McAdam, John D. McCarthy y Mayer N. Zald. La sociología de Tilly sigue un enfoque relacional, es decir, entiende que “los humanos desarrollan su personalidad y sus

²² Daniel Lanero y Antonio Miguez, “¿Lejos de la apatía?: politización y movimientos sociales en la España rural del final del Franquismo y la Transición (1968-1982): un estado de la cuestión”, en *Por surcos y calles. Movilización social e identidades en Galicia y País Vasco (1968-1982)*, ed. Daniel Lanero (Madrid: Catarata, 2013): 8-9.

²³ Pedro Luis Lorenzo Cadalso, *Fundamentos teóricos del conflicto social* (Madrid: Siglo XXI, 2001), 18-25.

²⁴ Joe Foweraker. *La democracia española. Los verdaderos artífices de la democracia en España* (Móstoles: Arias Montanos Editores, 1990)

prácticas a través de los intercambios con los demás humanos, y que los intercambios mismos siempre implican un grado de negociación y de creatividad”²⁵. Por tanto, se opone a los enfoques conductuales y a aquellos basados en las ideas y da una mayor capacidad a la acción consciente de los sujetos sociales. Además, es evidente que en su obra es central el estudio del caso concreto histórico como base sobre la que formular sus propuestas sociológicas. Esta importancia del caso concreto es asumida por los estudios de la Transición deudores de la sociología de Tilly y sus discípulos, que presentan un análisis que va de lo particular a lo general en contraposición a los análisis deterministas previos²⁶. Pero por lo que seguramente Tilly sea tan apropiado para el caso del objeto de estudio de estas páginas es por la centralidad que otorga a los movimientos sociales como garantes de la democracia y la soberanía popular. Una de las tesis centrales de *Contienda política y democracia en Europa 1650-2000* es que la democracia es consecuencia de la contienda política y, por tanto, el desarrollo de la contienda marca el tipo de democracia y viceversa, pues no es igual en regímenes democráticos que en aquellos que no lo son²⁷.

Los pilares teóricos que recogen los principales historiadores de la acción social en la Transición se sostienen sobre los conceptos de estructura de oportunidad política, estructuras de movilización y procesos enmarcadores. Eduardo González Calleja deja claro que Tilly ya pone las bases para este análisis: “desde su punto de vista, la acción colectiva no era un fenómeno espontáneo, sino un proceso deliberado de evaluación de costes y beneficios que surgía del desarrollo lógico de los cuatro factores anteriormente descritos: el interés, la organización, la movilización y la oportunidad”. Pero los autores que mejor elaboran estos términos son Sidney Tarrow, John D. McCarthy y Mayer N. Zald²⁸. La estructura de oportunidad política supone no buscar una causa universal de la acción colectiva, sino ver de qué manera una estructura política concreta puede favorecer o complicar la aparición de acción colectiva en un momento y lugar concreto. Es un giro total respecto a estudios

²⁵ Charles Tilly, *Violencia colectiva* (Barcelona: hacer editorial, 2007): 5-6.

²⁶ Ejemplos perfectos de la importancia que da Tilly al caso concreto histórico para afianzar sus conceptos sociológicos son: Charles Tilly, *Coerción, capital y los estados europeos 990-1990* (Madrid: Alianza Editorial, 1992), Charles Tilly y Lesley J. Wood, *Los movimientos sociales 1768-2008. Desde sus orígenes a Facebook* (Barcelona: Crítica, 2013) y Charles Tilly, *Las revoluciones europeas 1492-1992* (Barcelona: Crítica, 1995).

²⁷ Charles Tilly, *Contienda política y democracia en Europa 1650-2000* (Barcelona: hacer editorial, 2007), 13.

²⁸ La cita de Eduardo González Calleja en Eduardo González Calleja, “Charles Tilly, *From Mobilization to Revolution*”, *Cuadernos de Historia Contemporánea* 31 (2009): 348.

anteriores a las nuevas teorías del conflicto social que buscaban análisis más maximalistas. Las oportunidades políticas tienen mucho que ver con la acción del estado y están determinadas por los alineamientos inestables, los aliados influyentes, el incremento del acceso a la política, la división entre las élites y el grado de represión o facilitación, siendo vitales estas tres últimas en el caso de la democratización española. Además, estas oportunidades no son estáticas y una vez que se inicia la acción colectiva el enfrentamiento crea patrones que generan nuevas oportunidades de las que no solo tienen porque disfrutar los agentes ya involucrados en la acción, sino que también pueden afectar a otros movimientos, a movimientos oponentes y a las propias élites. Por tanto, la evolución de este concepto ha propiciado que no solo se entienda que es el Estado el que determina dicha estructura, sino que los propios sujetos sociales contestarios pueden provocar nuevas oportunidades y amenazas²⁹. Las estructuras de movilización son las “formas consensuadas de llevar a cabo acciones colectivas”. Los activistas tienen que elegir las formas de organización más apropiadas para la consecución de sus objetivos y pueden emplear formas organizativas heredadas, lo más común, o inventar nuevas formas. J. D. McCarthy diferencia cinco estructuras de movilización que van de menor a mayor grado de organización: familias y redes de amistades, aunque generalmente solo actúan en la vida personal pueden favorecer la movilización en situaciones concretas; redes informales, formadas por miembros politizados pero con límites poco definidos y liderazgos flexibles; híbridos, existen en el seno de organizaciones más amplias o instituciones; comités organizadores de campañas, grupos independientes que se unen a redes mayores para coordinar esfuerzos en situaciones de campaña electoral y conseguir así beneficios durante la legislatura; y movimientos sociales, estructuras colectivas bien organizadas y con unos objetivos plenamente definidos. Todas estas divisiones presentan un panorama muy rico para cualquier análisis comparativo de casos concretos³⁰. Por último, los procesos enmarcadores son el fruto de un esfuerzo mediante el cual se busca crear una retórica que justifique la actuación planteando

²⁹ Sidney Tarrow, “Estado y oportunidades: la estructuración política de los movimientos sociales”, en *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*, eds. Dough McAdam, John D. McCarthy y Mayer N. Zald (Madrid: Ediciones Istmo, 1999): 72-98; y Sidney Tarrow, *El poder en movimiento* (Madrid: Alianza Editorial, 2004): 120-122.

³⁰ John D. McCarthy, “Adoptar, adaptar e inventar límites y oportunidades”, en *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*, eds. Dough McAdam, John D. McCarthy y Mayer N. Zald (Madrid: Ediciones Istmo, 1999): 206-215.

una situación de injusticia, una víctima y un culpable (elaboración de marcos). Para encontrar imágenes que les permitan definir lo que es una injusticia y sus formas de organización y protesta se recurre a lo que Mayer N. Zald denomina stock cultural. Se suele recurrir a stocks heredados, aunque estos no son estáticos y movimientos exitosos, y en ocasiones no exitosos, pueden crear nuevos stocks³¹. Cuando los procesos enmarcadores tienen éxito generan identidades políticas sólidas que favorecen la protesta. Las identidades políticas son presentadas por Tilly en *Violencia colectiva* y en *Contienda política y democracia en Europa 1650-2000* y tienen cuatro elementos básicos: líneas divisorias, relatos que justifican estas divisiones, relaciones sociales entre ambos lados de la línea y relaciones sociales internas como fuente de solidaridad³².

Las nuevas teorías del conflicto social y los análisis basados en estos conceptos han calado en los estudios historiográficos sobre la democratización española. En cuanto a estudios del ámbito nacional se puede apreciar este enfoque en autores tan relevantes como Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Carme Molinero o Pere Ysàs³³. Centrándose en el espacio rural destacan los textos de Óscar J. Martín García como *A tientas con la democracia. Movilización, actitudes y cambio en la provincia de Albacete, 1966-1977*, “Oportunidades, amenazas y percepciones colectivas en la protesta contra el franquismo final, 1973-1976” y “<<Un deprimido trozo de España>>. La lucha por la democracia en una provincia subdesarrollada”³⁴. También Damián A. González Madrid o Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Mónica Fernández Amador, Francisco Cobo Romero, Francisco Erice Sebares, Camen

³¹ Mayer N. Zald, “Cultura, ideología y creación de marcos estratégicos”, en *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*, eds. Dough McAdam, John D. McCarthy y Mayer N. Zald (Madrid: Ediciones Istmo, 1999): 377-384; y Sidney Tarrow, *El poder en movimiento* (Madrid: Alianza Editorial, 2012): 251-255.

³² Mayer N. Zald, “Cultura, ideología y creación de marcos estratégicos”, en *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*, eds. Dough McAdam, John D. McCarthy y Mayer N. Zald (Madrid: Ediciones Istmo, 1999): 377-384; Sidney Tarrow, *El poder en movimiento* (Madrid: Alianza Editorial, 2012): 251-255; y Charles Tilly, *Contienda política y democracia en Europa 1650-2000* (Barcelona: hacer editorial, 2007): 55-56.

³³ Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, coord., *La sociedad española en la Transición. Los movimientos sociales en el proceso democratizador* (Madrid: Biblioteca Nueva, 2011); Carme Molinero, ed., *La Transición, treinta años después* (Barcelona: Ediciones Península, 2006); y Carme Molinero y Pere Ysàs, *La Transición. Historia y relatos* (Madrid: siglo XXI, 2018).

³⁴ Óscar J. Martín García, *A tientas con la democracia. Movilización, actitudes y cambio en la provincia de Albacete, 1966-1977* (Madrid: Catarata, 2008); Óscar J. Martín García, “Oportunidades, amenazas y percepciones colectivas en la protesta contra el franquismo final, 1973-1976”, *Historia social* 67 (2010): 51-67; y Óscar J. Martín García, “<<Un deprimido trozo de España>>. La lucha por la democracia en una provincia subdesarrollada”, en *La Transición se hizo en los pueblos: el caso de la provincia de Albacete*, coord. Manuel Ortiz Heras (Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 2016): 179-201.

González Martínez o Fuerteventura Escudero Andújar en la obra colectiva del primero recogen este enfoque en sus análisis locales del mundo rural³⁵. La mayoría de estos trabajos se centran en la estructura de oportunidad política y en la estructura de movilización. Por eso son tan valiosos los estudios que se aproximan a cuestiones relacionadas con las identidades y los procesos enmarcadores como son los artículos de Francisco Cobo y María Candelaria Fuentes Navarro o el de Ana Cabana y Daniel Lanero. El primer caso se centra en explicar cómo desde la oposición comunista se crea un discurso político en el campo para generar un movimiento interclasista en el que quepan campesinos y jornaleros y poder enfrentarse a un enemigo común, los grandes propietarios y la legalidad franquista. En el segundo caso, Ana Cabana y Daniel Lanero se apoyan en los marcos interpretativos definidos por Klandermas y C. Fernández y X.M. Sabucedo. Estos marcos son los de injusticia, identidad y coste/beneficio. Es decir, se centran en la elaboración retórica y discursiva que fabricaron los actores sociales gallegos en torno a las movilizaciones contra la cuota empresarial de la Seguridad Social Agraria (SSA) y contra la construcción de embalses para promover la acción de protesta³⁶.

Pero, más allá de aquellos estudios que siguen los preceptos de Charles Tilly, Sidney Tarrow y demás sociólogos de las nuevas teorías del conflicto social, hay una muy abundante bibliografía sobre la protesta y movilización social durante el tardofranquismo y la Transición que no hace más que crecer desde principios de siglo. La acción colectiva de la oposición se ha convertido en el principal factor explicativo para narrar el paso del Franquismo a un sistema democrático, sobre todo si se tiene en cuenta que debido a lo restringido de la participación ciudadana durante la dictadura cualquier tipo de protesta fuera de los limitados márgenes institucionales

³⁵ Damián A. González Madrid, “La definición del cambio. Contienda política, represión y control institucional en la provincia de Albacete (1977-1979), en *La Transición se hizo en los pueblos: el caso de la provincia de Albacete*, coord. Manuel Ortiz Heras (Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 2016): 45-75; y Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, coord., *La sociedad española en la Transición. Los movimientos sociales en el proceso democratizador* (Madrid: Biblioteca Nueva, 2011).

³⁶ Francisco Cobo Romero y María Candelaria Fuentes Navarro, “Los comunistas, la democracia y el campo. El <<asamblearismo campesino>> y la difusión de valores democráticos entra la sociedad rural, 1962-1975”, en *La España rural, siglos XIX y XX. Aspectos políticos, sociales y culturales*, eds. Teresa María Ortega López y Francisco Cobo Romero (Granada: Editorial Comares, 2011): 327-350; y Ana Cabana y Daniel Lanero, “Movilización social en la Galicia rural del Tardofranquismo (1960-1977)”, *Historia Agraria* 48 (agosto 2009): 111-132.

suponía un fuerte desafío³⁷. En estos esfuerzos han colaborado historiadores de tanto renombre como son Carme Molinero y Pere Ysàs en *La Transición. Historia y relatos*, Rafael Quirosa-Cheyrouze Muñoz en *La sociedad española en la Transición*, Álvaro Soto Carmona en “Conflictividad social y transición sindical” o en *Transición y cambio en España 1975-1996*, Manuel Pérez Ledesma en “<<Nuevos>> y <<viejos>> movimientos sociales en la Transición” o Mónica Threfall en “Una reevaluación del papel de las organizaciones de la sociedad civil en la Transición”³⁸. En muchos de estos trabajos se estudian los diferentes movimientos sociales y cómo aportan sus esfuerzos al proceso democratizador. Entre estos movimientos destacan el obrero, el vecinal, el estudiantil, el feminista, el pacifista e incluso Gonzalo Wilhelmi Casanova dedicada un capítulo a lo que denomina como grupos marginados (homosexuales, discapacitados y presos comunes)³⁹. Cuando se estudian estos movimientos suele aparecer el debate sobre la adecuación del término de nuevos movimientos sociales para aquellos surgidos en las décadas de los sesenta y setenta. Existen dos posturas principales, aquellos que defienden que las líneas básicas de estos movimientos no son innovadoras y, por tanto, no se les puede definir como nuevos, y aquellos que plantean que sus diferencias organizativas y en la creación de marcos son tan amplias que sí se les puede denominar así⁴⁰. Aunque no sea el objeto de este estudio

³⁷ Pere Ysàs, “La crisis de la dictadura franquista”, en *La Transición, treinta años después*, ed. Carme Molinero (Barcelona: Ediciones Península, 2006): 31-32; y Damián A. González Madrid y Óscar J. Martín García, “Desde abajo y en la periferia del desarrollismo. Cambio político y conflictividad social en La Mancha, 1962-1977”, en *El Franquismo y la Transición en España. Desmitificación y reconstrucción de la memoria de una época*, coord. Damián A. González Madrid (Madrid: Catarata, 2008): 124.

³⁸ Carme Molinero y Pere Ysàs, *La Transición. Historia y relatos* (Madrid: siglo XXI, 2018); Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, coord., *La sociedad española en la Transición. Los movimientos sociales en el proceso democratizador* (Madrid: Biblioteca Nueva, 2011); Álvaro Soto Carmona, “Conflictividad social y transición sindical”, en *Historia de la Transición (1975-1986)*, eds. Javier Tusell y Álvaro Soto Carmona (Madrid: Alianza Editorial, 1996); Álvaro Soto Carmona, *Transición y cambio en España 1975-1996* (Madrid: Alianza Editorial, 2005); Manuel Pérez Ledesma, “<<Nuevos>> y <<viejos>> movimientos sociales en la Transición”, en *La Transición, treinta años después*, ed. Carme Molinero (Barcelona: Ediciones Península, 2006); y Mónica Threfall, “Una reevaluación del papel de las organizaciones de la sociedad civil en la Transición”, en *Conflicto y consenso en la Transición española*, coord. Gutmaro Gómez Bravo (Madrid: Editorial Pablo Iglesias, 2009).

Sobre el trabajo de Mónica Threfall es muy acertada la crítica que hace a esos estudios que se refieren a los líderes de la oposición como élites, igualándolos a los provenientes del Franquismo, para justificar un modelo de Transición como pacto entre élites y no como disputa.

³⁹ Gonzalo Wilhelmi Casanova, “No digas que no se puede. Luchas de grupos marginados en la Transición”, en *La sociedad española en la Transición. Los movimientos sociales en el proceso democratizador*, coord. Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz (Madrid: Biblioteca Nueva, 2011): 287-302.

⁴⁰ Un ejemplo del primer caso se puede encontrar en Jesús Casquete, “Nuevos y viejos movimientos sociales en perspectiva comparada”, *Historia y política* 6 (2001): 197-213. Para el segundo caso: Ana de Miguel Álvarez, “Nuevos conflictos sociales, nuevas identidades sociales. La lucha por el reconocimiento”, *TABANQUE* 18 (2004): 22-24.

adentrarse en dicho debate, existe cierto consenso en que durante el tardofranquismo y la Transición los movimientos sociales españoles no pueden considerarse de ninguna manera como nuevos movimientos sociales por su fuerte vinculación al PCE y porque sus reivindicaciones políticas tienen un peso primordial en sus marcos y en su acción. Esto cambia en la década de los ochenta⁴¹. Aunque en todos estos trabajos que explican la democratización desde la acción social ya hay una cierta tendencia a un enfoque más democrático o popular, son los de Xavier Domènech, Pere Ysàs o Damián A. González Madrid y Óscar J. Martín García los que ponen el foco directamente en la necesidad de una historia “desde abajo” que evidencie que el fin del Franquismo fue la “obra de una inmensa minoría”⁴².

Como se ha venido desarrollando, las nuevas teorías del conflicto social y los estudios “desde abajo” han servido para enriquecer el análisis del proceso de Transición, pero todavía hay campos de estudio que están infrarrepresentados. Este es el caso de la protesta en los espacios rurales. La mayoría de las monografías y obras se centran en las zonas industriales y en los grandes núcleos urbanos y obvian o dedican un espacio ínfimo a la acción social en el campo español. Siguiendo la idea de que el mundo rural también tiene algo que aportar al estudio de la democratización española han surgido trabajos más amplios sobre este aspecto, como los de Miguel Carlos Gómez Oliver, los de Teresa María Ortega López o los de Francisco Cobo y María Candelaria Fuentes Navarro⁴³. Pero los más útiles para este trabajo son aquellos que se han centrado en las regiones concretas analizadas: Galicia, Albacete

⁴¹ Manuel Pérez Ledesma, “<<Nuevos>> y <<viejos>> movimientos sociales en la Transición”, en *La Transición, treinta años después*, ed. Carme Molinero (Barcelona: Ediciones Península, 2006): 144-145.

⁴² Xavier Domènech Sampere, “El cambio político desde abajo (1962-1976)”, *Mientras tanto* 90 (2004): 53-70; Xavier Domènech Sampere, “El cambio político (1962-1976) Materiales para una perspectiva desde abajo”, *Historia del presente* 1 (2002): 46-67; Pere Ysàs, “¿Una sociedad pasiva? Actitudes, activismo y conflictividad social en el franquismo tardío”, *Ayer* 68 (2007: 4): 31-57; y Damián A. González Madrid y Óscar J. Martín García, “Desde abajo y en la periferia del desarrollismo. Cambio político y conflictividad social en La Mancha, 1962-1977”, en *El Franquismo y la Transición en España. Desmitificación y reconstrucción de la memoria de una época*, coord. Damián A. González Madrid (Madrid: Catarata, 2008): 124-148.

⁴³ Miguel Carlos Gómez Oliver, “La sociedad rural ante la Transición política: ¿Y ahora qué?”, en *Historia de la Transición en España. Los inicios del proceso democratizador*, coord. Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz (Madrid: Biblioteca Nueva, 2007); Teresa María Ortega López, “Campesinos y jornaleros bajo el Franquismo. Represión, disenso y conflictividad en el campo español, 1939-1975”, en *La España rural, siglos XIX y XX. Aspectos políticos, sociales y culturales*, eds. Teresa María Ortega López y Francisco Cobo Romero (Granada: Editorial Comares, 2011): 289-312; y Francisco Cobo Romero y María Candelaria Fuentes Navarro, “Los comunistas, la democracia y el campo. El <<asamblearismo campesino>> y la difusión de valores democráticos entra la sociedad rural, 1962-1975”, en *La España rural, siglos XIX y XX. Aspectos políticos, sociales y culturales*, eds. Teresa María Ortega López y Francisco Cobo Romero (Granada: Editorial Comares, 2011): 327-350.

y Andalucía. Para Galicia destaca la figura de Daniel Lanero, que ha desarrollado esfuerzos investigadores y como editor para sacar adelante obras colectivas que sirvan para enriquecer el conocimiento de esta región⁴⁴. En el caso de Albacete, Manuel Ortiz Heras ha hecho un gran esfuerzo para abrir una línea de investigación que ha sido seguida por otros autores muy prolíficos como Óscar J. Martín García y Damián A. González Madrid⁴⁵. Por último, respecto a Andalucía la figura más relevante es la de Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, pero también destacan otros historiadores de nivel como Mónica Fernández Amador, Francisco Cobo Romero y Teresa María Ortega López⁴⁶.

A pesar del enorme avance que suponen estos trabajos, todavía existen numerosas limitaciones en el conocimiento de la protesta rural en el tardofranquismo y la Transición. Aunque no sea la finalidad extenderse en exceso hay dos que es útil señalar. En primer lugar, es evidente que han predominado las lecturas que conectan la protesta, y exclusivamente la organizada en redes formales, con la de nivel nacional que se está desarrollando eminentemente en zonas industriales y urbanas. Por lo tanto, se ha privilegiado el análisis de sindicatos y movimientos nacionales como CCOO y la lucha por las libertades democráticas. Excepciones como la de Ana

⁴⁴ Ana Cabana y Daniel Lanero, “Movilización social en la Galicia rural del Tardofranquismo (1960-1977)”, *Historia Agraria* 48 (agosto 2009): 111-132; Daniel Lanero Táboas y Daniela Ferrández Pérez, “El arte de saber durar... Sobre la continuidad de los poderes locales en la Galicia rural entre Franquismo y democracia (1973-1979)”, *Historia Política* 40 (2018): 331-362; Daniel Lanero, ed., *Por surcos y calles. Movilización social e identidades en Galicia y País Vasco (1968-1982)* (Madrid: Catarata, 2013); y Daniel Lanero, ed., *El disputado voto de los labriegos* (Granada: Editorial Comares, 2018).

⁴⁵ Manuel Ortiz Heras, coord., *La Transición se hizo en los pueblos: el caso de la provincia de Albacete* (Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 2016); Manuel Ortiz Heras, “Los movimientos sociales en la recuperación de la democracia: Castilla-La Mancha, 1962-1983”, en *La sociedad española en la Transición. Los movimientos sociales en el proceso democratizador*, coord. Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz (Madrid: Biblioteca Nueva, 2011); Óscar J. Martín García, *A tientas con la democracia. Movilización, actitudes y cambio en la provincia de Albacete, 1966-1977* (Madrid: Catarata, 2008); Óscar J. Martín García, “<<Un deprimido trozo de España>>. La lucha por la democracia en una provincia subdesarrollada”, en *La Transición se hizo en los pueblos: el caso de la provincia de Albacete*, coord. Manuel Ortiz Heras (Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 2016): 179-201; y Damián A. González Madrid y Óscar J. Martín García, “Desde abajo y en la periferia del desarrollismo. Cambio político y conflictividad social en La Mancha, 1962-1977”, en *El Franquismo y la Transición en España. Desmitificación y reconstrucción de la memoria de una época*, coord. Damián A. González Madrid (Madrid: Catarata, 2008): 124-148.

⁴⁶ Rafael Quirosa-Cheyrouze y Mónica Fernández Amador, eds., *Movimientos sociales e instituciones locales en la Transición. La lucha por la democracia en la Andalucía rural* (Madrid: Catarata, 2017); Francisco Cobo Romero, “Movimientos sociales y construcción de la democracia en Andalucía, 1958-1983: propuestas para un debate”, en *La sociedad española en la Transición. Los movimientos sociales en el proceso democratizador*, coord. Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz (Madrid: Biblioteca Nueva, 2011); y Teresa María Ortega López, “La protesta en el Sur, conflictividad laboral y oposición sindical en Andalucía bajo la dictadura franquista, 1958-1975”, en *Revista de estudios regionales* 72 (2005): 113-140.

Cabana y Daniel Lanero en “Movilización social en la Galicia rural del Tardofranquismo (1960-1977)”, donde se centran en luchas locales y exclusivas como las protestas contra la recaudación de la cuota de la SSA o la construcción de embalses; o la de Óscar J. Martín García en *A tientas con la democracia. Movilización, actitudes y cambio en la provincia de Albacete*, poniendo el foco en las protestas subterráneas e individualizadas contra la legalidad franquista, son obras de gran valor porque abren un nuevo camino de investigación en el que todavía falta mucho por explorar. En segundo lugar, y siguiendo la línea de la problemática anterior, Daniel Lanero señala en *Por surcos y calles. Movilización social e identidades en Galicia y País Vasco (1968-1980)*, que son necesarios estudios que se centren en la comunidad rural como sujeto político más allá de sindicatos y organizaciones. Es decir, trabajos que aborden las dinámicas internas y cómo estas influyen en la democratización o en la continuidad dentro de estas comunidades locales, más allá de la nueva legalidad democrática aplicada desde Madrid. De nuevo es valioso resaltar los esfuerzos de Daniel Lanero en el estudio de los cambios y pervivencias dentro de los poderes locales en los ayuntamientos gallegos con las elecciones municipales. Pero también son dignos de nombrar estudios que analizan los discursos de prensa de ámbito local y su importancia en la democratización por la difusión de ideas y valores democráticos⁴⁷.

En definitiva, este trabajo recurre a los estudios y autores de referencia que abordan la lucha social, económica y política durante la crisis del Franquismo y la Transición en espacios provinciales y con gran peso de la actividad rural. De este modo se pretende elaborar un análisis de la democratización española “desde abajo” como un esfuerzo de gran parte de la sociedad civil que fue esencial en la obtención de libertades políticas y cuya acción no se limitó exclusivamente a los centros

⁴⁷ Daniel Lanero Táboas y Daniela Ferrández Pérez, “El arte de saber durar... Sobre la continuidad de los poderes locales en la Galicia rural entre Franquismo y democracia (1973-1979)”, *Historia Política* 40 (2018): 331-362; Daniel Lanero, ed., *El disputado voto de los labriegos* (Granada: Editorial Comares, 2018); Óscar J. Martín García, “Antes de la Transición, la lucha por la libertad: el papel de la prensa en provincias en el desgaste de la dictadura franquista. La verdad de Albacete (1973-1977)”, en *El papel de los medios de comunicación*, coords. Rafael Quirosa-Cheyrouze Muñoz, Luis Carlos Navarro Pérez y Carmen Rosa García Ruíz (Almería: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería, 2007): 261-278; Mónica Fernández Amador y Emilia Martos Contreras, “La prensa como plataforma de expresión de los problemas sociales durante la Transición”, *Movimientos sociales e instituciones locales en la Transición. La lucha por la democracia en la Andalucía rural*, eds. en Rafael Quirosa-Cheyrouze y Mónica Fernández Amador (Madrid: Catarata, 2017): 136-163; Javier A. León Casas, “La cultura de la Transición en la provincia de Albacete”, en *La Transición se hizo en los pueblos: el caso de la provincia de Albacete*, coord. Manuel Ortiz Heras (Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 2016): 281-303; y Óscar J. Martín García, “‘La Verdad’, una nueva prensa resultado de los realineamientos políticos”, en *A tientas con la democracia. Movilización, actitudes y cambio en la provincia de Albacete, 1966-1977* (Madrid: Catarata, 2008): 162-172.

industriales y urbanos. Es necesario recuperar los esfuerzos de una gran parte de la sociedad española que ha sido menos reconocida y que desde sus espacios locales y rurales luchó contra la dictadura en una estructura de oportunidades políticas en muchos casos más restrictiva que en los núcleos urbanos.

2. DESARROLLO

2.1. ESTRUCTURA DE OPORTUNIDAD POLÍTICA Y PROTESTA SOCIAL

Hay un consenso general en torno a que la democratización debe gran parte de su éxito a la oleada de movilizaciones que recorre el país desde inicios de la década de los sesenta hasta finales de los setenta. Autores como Cayo Sastre García han desarrollado visiones opuestas que se basan en la idea central de que la Transición se hizo como un pacto entre élites favorecido por la desmovilización general de la sociedad. Apoyándose en gran cantidad de datos afirma que el desinterés de los españoles sobre la política era mayor que en los países de su entorno y que la movilización antifranquista no fue un fenómeno generalizado en el que participase la mayoría social⁴⁸. Sin dejar de ser cierto, relacionar dichos datos con una apatía generalizada parece que no se ajusta a una realidad más compleja y obvia la naturaleza propia del régimen franquista. Para la dictadura, cualquier forma de protesta abierta suponía un desafío directo a la legalidad y tenía la potencialidad de convertirse en movilización propiamente antifranquista. Cualquier atisbo de rebeldía preocupaba a las autoridades, sobre todo en zonas como Jaén o Albacete, donde la tranquilidad social había sido la norma durante más de dos décadas⁴⁹. Por lo tanto, sí que se puede afirmar que la movilización social “desde abajo” durante el tardofranquismo y la Transición es uno de los ejes necesario para explicar el proceso de democratización.

En 1962 se inicia un periodo convulso a raíz de las oleadas de huelgas iniciadas en Asturias gracias a la oportunidad política que suponía la negociación de convenios colectivos a raíz de la Ley de Convenios de 1958. Aunque esta oleada de conflictividad no podría haber conseguido una continuidad que conectase con el inicio de la

⁴⁸ Cayo Sastre García, *Transición y desmovilización política en España (1975-1978)* (Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico – Universidad de Valladolid, 1997)

⁴⁹ Óscar J. Martín García, “<<Un deprimido trozo de España>>. La lucha por la democracia en una provincia subdesarrollada”, en *La Transición se hizo en los pueblos: el caso de la provincia de Albacete*, coord. Manuel Ortiz Heras (Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 2016): 181.

Transición, más de una década después, de no haber sido por el desarrollo de nuevas formas organizativas como las CCOO, que permiten un modelo de conflictividad sostenido, o por los esfuerzos de gran parte del movimiento obrero por incluir en sus demandas el cambio político⁵⁰. Además, los actores de la protesta se insertaron en un marco de oportunidad político concreto en el que ejercían de forma activa tanto como emisores, generadores de oportunidades, como receptores, adecuando su actividad a los márgenes disponibles. Durante el tardofranquismo la estructura de oportunidad se amplió por la crisis del régimen debido a motivos muy variados como la división producida dentro de las élites a raíz del proceso de institucionalización o por factores externos como la Revolución de los Claveles o el creciente desprestigio internacional del Franquismo⁵¹. La división de las élites fue esencial también a nivel local. En Albacete, el poder municipal venía sufriendo un gran desprestigio desde finales de los sesenta por la penosa situación de los servicios públicos, lo que provocó las quejas de un sector de concejales que querían poder desarrollar su actividad de forma más autónoma para mejorar la situación material de los vecinos. Finalmente, estas quejas se resolvieron con el nombramiento de un nuevo alcalde con aire reformista en enero de 1974⁵². Por otro lado, autores como Tarrow afirman que la subversión de unos sectores puede ampliar la oportunidad para la protesta del conjunto de la sociedad⁵³. Este es el caso de ciertos sectores contestatarios que empezaron a aparecer dentro de instituciones y grupos en los que la dictadura tradicionalmente se había apoyado para legitimarse: el Ejército, la Iglesia, la prensa o los profesionales con formación superior⁵⁴. En esta situación, el sentimiento de amenaza percibido por el régimen tuvo

⁵⁰ Xavier Domènech Sampere, “El cambio político (1962-1976) Materiales para una perspectiva desde abajo”, *Historia del presente* 1 (2002): 51.

⁵¹ Álvaro Soto Carmona, “Continuidad, reformas y sobre todo improvisación”, en *Historia de la Transición en España. Los inicios del proceso democratizador*, coord. Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz (Madrid: Biblioteca Nueva, 2007): 238; y Juan Carlos Pereira Castañares, “La crisis de la política exterior franquista y el inicio del cambio político (1973-1976)”, en *Historia de la Transición en España. Los inicios del proceso democratizador*, coord. Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz (Madrid: Biblioteca Nueva, 2007): 358-359.

⁵² Óscar J. Martín García, *A tientas con la democracia. Movilización, actitudes y cambio en la provincia de Albacete, 1966-1977* (Madrid: Catarata, 2008), 154-155.

⁵³ Sidney Tarrow, “Estado y oportunidades: la estructuración política de los movimientos sociales”, en *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*, eds. Dough McAdam, John D. McCarthy y Mayer N. Zald (Madrid: Ediciones Istmo, 1999): 72-98; y Sidney Tarrow, *El poder en movimiento* (Madrid: Alianza Editorial, 2004): 120-122.

⁵⁴ Sobre la prensa: Javier Muñoz Soro, “Parlamentos de papel: la prensa crítica en la crisis del Franquismo”, en *Historia de la Transición en España. Los inicios del proceso democratizador*, coord. Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz (Madrid: Biblioteca Nueva, 2007): 449-463. Sobre la Iglesia: Feliciano Montero García, “El Taranconismo. La Transición de la Iglesia antes de la Transición”, en *Historia de la Transición en España. Los*

como efecto un repunte represivo entre 1967 y 1973 que se demostró como la mayor oleada de violencia estatal desde los años cuarenta. Lo paradójico de la represión es que actuó a la vez como amenaza y como oportunidad. Como amenaza porque desalentaba la protesta de los actores menos comprometidos por el aumento de los costes y como oportunidad porque legitimó la contestación social y provocó múltiples protestas en solidaridad a los represaliados. Sobre todo, en un momento en el que la represión estaba dejando de atacar exclusivamente a grupúsculos desconocidos para afectar a miembros respetados de la comunidad por su actividad en la defensa de los intereses colectivos⁵⁵.

La muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 fue el pistoletazo de salida para el periodo conocido como Transición. La desaparición física del dictador supuso una mayor tensión entre los diferentes proyectos dentro del Franquismo y un creciente empuje por parte de las fuerzas antifranquistas. A partir de este momento aumentó drásticamente, y de forma continuada hasta 1977, el número de manifestaciones, de manifestantes y de huelgas⁵⁶. Son cinco los proyectos políticos que pugnaron entre sí a partir de 1975: los continuistas, los pseudoreformistas, los reformistas, los rupturistas y los revolucionarios⁵⁷. Pero, rápidamente, tras la caída del gobierno de Carlos Arias Navarro en julio de 1976, solo quedaron dos proyectos en liza, el reformista y el rupturista, sobreviviendo exclusivamente el primero tras la derrota de las fuerzas rupturistas en el referéndum sobre la Ley para la Reforma Política del 15

inicios del proceso democratizador, coord. Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz (Madrid: Biblioteca Nueva, 2007): 195-211; Juan Manuel Guillem Mesado, “Luz y sal: movimiento católico en tiempos de cambio”, en *La sociedad española en la Transición. Los movimientos sociales en el proceso democratizador*, coord. Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz (Madrid: Biblioteca Nueva, 2011): 237-257; Feliciano Montero, “Origen y evolución de la Acción Católica española”, en *Clericalismo y asociacionismo católico en España, de la Restauración a la Transición: un siglo entre el palio y el consiliario*, coords. Ángel Luis López Villaverde, Alfonso Botti y Julio de la Cueva Merino (Universidad de Castilla-La Mancha: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2005), 133-159; y Enrique Berzal de la Rosa, “Católicos en la lucha antifranquista. Militancia sindical y política”, *Historia del presente* 10 (2007: 2): 7-24. Sobre Ejército: Gabriel Cardona Escanero, “La transición militar antes del 23-F”, en *Historia de la Transición en España. Los inicios del proceso democratizador*, coord. Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz (Madrid: Biblioteca Nueva, 2007), 211-219. Sobre profesionales: Carme Molinero y Pere Ysàs, *La Transición. Historia y relatos* (Madrid: siglo XXI, 2018), 32-33.

⁵⁵ Damián A. González Madrid y Óscar J. Martín García, “Desde abajo y en la periferia del desarrollismo. Cambio político y conflictividad social en La Mancha, 1962-1977”, en *El Franquismo y la Transición en España. Desmitificación y reconstrucción de la memoria de una época*, coord. Damián A. González Madrid (Madrid: Catarata, 2008): 136-137; y Santos Juliá, *Transición* (Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2017), 357-358.

⁵⁶ Sobre tipología y cantidad de manifestaciones durante la Transición: Ignacio Sánchez-Cuenca y Paloma Aguilar Fernández, “Violencia política y movilización social en la Transición española”, en *Violencia y transiciones políticas a finales del siglo XX. Europa del Sur – América Latina*, eds. Sophie Baby, Olivier Campagnon y Eduardo González Calleja (Madrid: Casa de Velázquez, 2009).

⁵⁷ Álvaro Soto Carmona, *Transición y cambio en España 1975-1996* (Madrid: Alianza Editorial: 2005), 53-57.

de diciembre de 1976. Es a partir de las elecciones de 1977 cuando la movilización empezó a retrotraerse y los actores de la oposición empezaron a adoptar formas eminentemente defensivas, coincidiendo con la pérdida de importancia de la calle frente a los despachos en la política nacional⁵⁸.

El campo es el gran olvidado de los estudios sobre el tardofranquismo y la Transición, y es cierto que en regiones con gran peso agrícola como Galicia, Albacete o Andalucía existieron características propias que dificultaron la protesta, como el envejecimiento poblacional, la cuantiosa emigración, el subdesarrollo industrial o el minifundismo empresarial, pero esto no significa que fuesen espacios pasivos y expectantes de los procesos ocurridos en Madrid, Cataluña y el País Vasco⁵⁹. El desarrollismo de los sesenta en las zonas rurales no supuso el “milagro económico” que se propugnaba desde las autoridades, si no que implicó el abandono de los habitantes en edad de trabajar para instalarse en los suburbios de las grandes ciudades. En provincias como Albacete, donde unas 210.000 personas emigraron entre 1940 y 1975, este fenómeno significó la agudización de un proceso de abandono económico y social del medio rural que venía desde el final de la Guerra Civil⁶⁰. Debido a estas limitaciones, la protesta de estos años tuvo menos impacto en las zonas rurales que en las zonas urbanas y con gran desarrollo industrial. Pero esto no significa de ninguna manera que en el espacio que aquí se estudia la aceptación del franquismo y la pasividad fuesen generalizadas. Si se asume la definición de protesta de Melucci, “una construcción a través de los recursos disponibles de acuerdo con las posibilidades y obstáculos presentes en un determinado entorno”, se pueden descubrir mayores complejidades dentro la conflictividad social⁶¹. Desde el primer

⁵⁸ *Ibidem*, 38; Álvaro Soto Carmona, “Conflictividad social y transición sindical”, en *Historia de la Transición* (1975-1986), eds. Javier Tusell y Álvaro Soto Carmona (Madrid: Alianza Editorial, 1996), 378; y Álvaro Soto Carmona, “Los pactos en las transiciones democráticas. España: 1975-1982”, *Aportes: revista de historia contemporánea* 97 (2017): 227-228.

⁵⁹ Teresa María Ortega López, “La protesta en el Sur, conflictividad laboral y oposición sindical en Andalucía bajo la dictadura franquista, 1958-1975”, en *Revista de estudios regionales* 72 (2005): 121; Óscar J. Martín García, “Entre la política, la economía y el discurso. La protesta contra la dictadura franquista en la provincia de Albacete, 1970-1976”, *Historia Contemporánea* 36 (2008): 196; y Daniela Fernández Pérez y Daniel Lanero Taboas, “Adaptarse o desaparecer: estrategias de consolidación de los poderes locales franquistas en la Galicia de la Transición”, en *Por surcos y calles. Movilización social e identidades en Galicia y País Vasco (1968-1982)*, ed. Daniel Lanero (Madrid: Catarata, 2013): 44-45.

⁶⁰ Óscar J. Martín García, *A tientas con la democracia. Movilización, actitudes y cambio en la provincia de Albacete, 1966-1977* (Madrid: Catarata, 2008), 47.

⁶¹ Cita en: Melucci, “Getting Involved: Identity and Mobilization in Social Movements”, en *From structure to action: comparing social movement research across cultures*, eds. B. Kanderians, H. Kriesi y S. Tarrow

momento se están desarrollando formas de contestación más ocultas que, aunque no suponen un desafío directo, son un reflejo del descontento ciudadano. Esta protesta subterránea no suele aparecer en los trabajos de los historiadores, pero muestra muy bien cómo la población rural, lejos de ser pasiva y de no tener originalidad, se adaptaba para poder enfrentar al régimen en una estructura de oportunidad más restringida, usando una estrategia encaminada a reducir los costes que supondría una provocación abierta. Lo que James C. Scott denominó las “armas de los débiles”⁶². Para el caso de Albacete, Óscar J. Martín García señala prácticas como el absentismo laboral, los destrozos, los sabotajes, los hurtos, el boicot o la reducción consciente de rendimiento en el trabajo⁶³.

Aun así, aunque el grado de movilización abierta no fuese tan alto, a finales de los sesenta y principios de los setenta empezaron a surgir formas de protesta directa y marcadamente subversivas gracias a una estructura de oportunidad política que, aunque restringida, se estaba abriendo progresivamente. Gran parte de los acontecimientos nacionales fruto de la crisis franquista también tuvieron su impacto en el campo. Dentro de las élites, en la década de los sesenta, empezó a cobrar peso el enfrentamiento entre diferentes proyectos que se diferenciaban principalmente por su forma de entender cómo se debía contestar a las nuevas realidades y actores sociales que estaban generando una creciente deslegitimización del régimen. Esta división se hizo latente también a escala local, sobre todo con el gobierno de Carlos Arias Navarro, tras el asesinato de Carrero Blanco en diciembre de 1973, cuando se iniciaría un proceso de recambio de jerarquías municipales y provinciales que afectó a regiones como Albacete, donde el alcalde fue sustituido por una personalidad más reformista. Esto provocó disputas internas que suponían “la reproducción a nivel municipal de los enfrentamientos que estaban teniendo lugar en las altas esferas del

(Greenwich: JAI Press, 1988), 322 en Óscar J. Martín García, *A tientas con la democracia. Movilización, actitudes y cambio en la provincia de Albacete, 1966-1977* (Madrid: Catarata, 2008), 49.

⁶² James C. Scott, *Weapons of the weak. Everyday Forms of Peasant Resistance*, (New Haven: Yale University Press, 1985), 16-18, en Teresa María Ortega López, “Campesinos y jornaleros bajo el Franquismo. Represión, disenso y conflictividad en el campo español, 1939-1975”, en *La España rural, siglos XIX y XX. Aspectos políticos, sociales y culturales*, eds. Teresa María Ortega López y Francisco Cobo Romero (Granada: Editorial Comares, 2011): 308.

⁶³ Óscar J. Martín García, *A tientas con la democracia. Movilización, actitudes y cambio en la provincia de Albacete, 1966-1977* (Madrid: Catarata, 2008), 50-55.

régimen entre aperturistas e inmovilistas”⁶⁴. Las divisiones internas permitían que surgiesen focos de disidencia dentro de las propias instituciones y antiguos apoyos del régimen. También en estas regiones empezaron a surgir discursos de carácter democrático dentro de las iglesias, en los periódicos o entre los sectores profesionales. Aunque la tónica general dentro de las iglesias rurales era el apoyo a la dictadura, empezaron a surgir casos excepcionales de sacerdotes, en su gran mayoría exiliados de sus tierras de origen por sus actividades subversivas, que se opusieron al régimen y que difundieron mensajes preocupantes para las autoridades locales y nacionales. Lo mismo ocurría desde sectores de la prensa como el periódico albacetense *La Verdad* o el almeriense *Ideal*⁶⁵. En este ambiente aparecieron autoridades políticas de carácter reformista, *tribunos del pueblo*, que provocaron un fenómeno de oportunidad bidireccional. Por un lado, los movimientos que consiguieron cierto apoyo de las autoridades pudieron aprovecharlo para disminuir el coste de la protesta y, a su vez, algunas autoridades usaron dicho apoyo para promover su carrera política o para proponer medidas reformistas como solución al ambiente de desestabilidad. Según McAdam, Tarrow y Tilly, la “contienda entre elites y la contienda popular se encuentran emparejadas más de cerca en los regímenes de capacidad alta no democráticos”⁶⁶. Por tanto, la ruptura interna del Franquismo y la debilidad del régimen aumentaron las opciones de acción de los movimientos sociales, pero también, el descrédito y desgaste que la movilización provocó social acarreo sobre las estructuras de poder encarnó una oportunidad para aquellos que estando dentro del sistema tuvieron la voluntad de aprovechar la situación para avanzar por el camino de la reforma⁶⁷.

La creciente falta de operatividad de la Organización Sindical en el contexto de crisis económica también facilitaría la extensión de sindicatos clandestinos de clase.

⁶⁴ Óscar José Martín García, *Albacete en Transición. El ayuntamiento y el cambio político, 1970-1979* (Albacete: Instituto de estudios albacetenses “Don Juan Manuel”, 2006), 42.

⁶⁵ Óscar J. Martín García, *A tientas con la democracia. Movilización, actitudes y cambio en la provincia de Albacete, 1966-1977* (Madrid: Catarata, 2008), 113-116; y Mónica Fernández Amador y Emilia Martos Contreras, “La prensa como plataforma de expresión de los problemas sociales durante la Transición”, *Movimientos sociales e instituciones locales en la Transición. La lucha por la democracia en la Andalucía rural*, eds. en Rafael Quirosa-Cheyrouze y Mónica Fernández Amador (Madrid: Catarata, 2017): 136-163.

⁶⁶ Doug McAdam, Sidney Tarrow y Charles Tilly, *Dinámica de la contienda política* (Barcelona: Editorial Hacer, 2005), 230.

⁶⁷ Óscar J. Martín García, *A tientas con la democracia. Movilización, actitudes y cambio en la provincia de Albacete, 1966-1977* (Madrid: Catarata, 2008), 153.

La crisis del petróleo no solo afectó a las zonas industriales. Los efectos de la crisis sobre las áreas urbanas provocaron que la industria dejase de absorber al gran número de inmigrantes procedentes del campo, lo que acarreó subidas continuadas del paro en regiones como Andalucía o Extremadura, que juntas acumulaban un 78,5% del desempleo agrícola del país⁶⁸. La Organización Sindical de Albacete venía denunciado el abandono del campo desde la década de los sesenta, las “repercusiones propias del Plan de Estabilización han creado en algunas zonas de nuestra provincia una situación grave, originando el que nuestros trabajadores se vean en la necesidad de emigrar a otras regiones donde cuentan con grandes factorías o centros fabriles”, pero no tenían capacidad de enfrentarse a los intereses patronales en el contexto de la crisis⁶⁹. Óscar J. Martín García pone el ejemplo del conflicto laboral que se desató en otoño de 1974 en la empresa textil López Vera a raíz del despido de dos trabajadoras. La Organización Sindical actuó en defensa de las trabajadoras para evitar una mayor politización, pero no tuvo nada que hacer frente a la actitud obstinada del empresario⁷⁰. Ante el desprestigio del sindicato oficial cobraban cada vez más fuerza sindicatos de clase clandestinos como las Comisiones Campesinas (CCCC), con gran implantación en Galicia, o el Sindicato de Obreros del Campo (SOC), que nació en Antequera en agosto de 1976.

Pero, igual que a nivel nacional, es con la muerte de Franco cuando tuvo lugar un mayor repunte de la movilización política y social. A pesar de que Martín Villa ordenase a las autoridades provinciales y locales reprimir, “en todo caso y con la máxima energía”, cualquier acción que atentase contra el orden público, las expectativas de cambio y la percepción de que era posible conseguir alterar el orden social y político, vigente durante casi cuatro décadas, hizo que los esfuerzos de la oposición también aumentasen en las zonas provinciales. El gobernador civil de Albacete, Moisés Arrimadas, hizo todo lo posible por evitar la protesta y mantener el control de las calles, pero no fue suficiente para evitar el aumento de la conflictividad social y la implantación de la Coordinación Democrática en su provincia solo cuatro

⁶⁸ Antonio Herrera, “Los socialistas y la construcción de la democracia en el mundo rural durante la Transición política, 1975-1986”, en *La España rural, siglos XIX y XX. Aspectos políticos, sociales y culturales*, eds. Teresa María Ortega López y Francisco Cobo Romero (Granada: Editorial Comares, 2011): 356-357.

⁶⁹ Óscar J. Martín García, *A tientas con la democracia. Movilización, actitudes y cambio en la provincia de Albacete, 1966-1977* (Madrid: Catarata, 2008), 47.

⁷⁰ *Ibidem*, 118-119.

meses después de su fundación nacional⁷¹. Aun así, en el espacio local y en el campo pervivieron una serie de instituciones heredadas de la dictadura que, por un lado, motivaron protestas por la incomprensión de su supervivencia en democracia y, por otro, ayudaron a mantener dinámicas y personajes heredados del franquismo que pudieron adaptarse a la nueva situación para seguir en los mecanismos de poder. Estas instituciones fueron las Cámaras Agrarias y los ayuntamientos. A pesar de que Enrique de la Mata, Ministro de Relaciones Sindicales, inició el desmantelamiento de la Organización Sindical Española en octubre de 1976 con la creación de la Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales, las Cámaras Agrarias mantuvieron intactas sus atribuciones y la obligatoriedad de afiliación para todos los trabajadores del sector, lo que resultaba en competencia desleal para las nuevas Organizaciones Agrarias formadas al amparo de la ley de libertad sindical del 1 de abril de 1977. Las Cámaras Agrarias, herederas de las Hermandades de Labradores y Ganaderos franquistas, mantuvieron estas prebendas hasta la entrada en vigor de la Constitución en diciembre de 1978. A partir de este momento esta institución entró en crisis por la competencia del resto de organizaciones⁷². En los ayuntamientos rurales también existió una gran continuidad respecto a la dictadura. Las elecciones de alcaldes y presidentes de diputaciones provinciales de enero de 1976 se hicieron siguiendo las dinámicas de la democracia orgánica franquista con la intención de mantener en los puestos de poder a individuos adeptos. La tónica general fue la reelección de personas que ostentaban la alcaldía con anterioridad. Por ejemplo, en Ourense, 35 de las 45 alcaldías no cambiaron de regidor. Aprovechando la apertura del gobierno de Adolfo Suárez, la oposición empezó a reivindicar elecciones municipales, pero estas fueron retrasadas de forma interesada para asegurarse el éxito por parte del partido de gobierno. Esta estrategia fue acertada y la UCD consiguió mayorías en gran parte de los municipios rurales. En muchos de estos municipios,

⁷¹ Damián A. González Madrid, “La definición del cambio. Contienda política, represión y control institucional en la provincia de Albacete (1977-1979), en *La Transición se hizo en los pueblos: el caso de la provincia de Albacete*, coord. Manuel Ortiz Heras (Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 2016): 48-49; y Sergio Molina García, “«¡Fuera las caretas!» Creación y consolidación de los partidos políticos en Albacete en el inicio de la Transición”, en *La Transición se hizo en los pueblos: el caso de la provincia de Albacete*, coord. Manuel Ortiz Heras (Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 2016): 117.

⁷² Álvaro Soto Carmona, “Conflictividad social y transición sindical”, en *Historia de la Transición (1975-1986)*, eds. Javier Tusell y Álvaro Soto (Madrid: Alianza Editorial, 1996), 389-396; y Antonio Herrera, “Los socialistas y la construcción de la democracia en el mundo rural durante la Transición política, 1975-1986”, en *La España rural, siglos XIX y XX. Aspectos políticos, sociales y culturales*, eds. Teresa María Ortega López y Francisco Cobo Romero (Granada: Editorial Comares, 2011), 367.

debido a su experiencia y a la forma de actuar interna de UCD, renovaron gran parte de los concejales del Franquismo. Aunque este fenómeno fue matizable y dependió mucho del caso concreto. Mientras que en Ourense la tasa de continuidad fue de un 22,8%, en Andalucía se limitaba al 6,1%⁷³.

Con todo esto, el ciclo de acción colectiva de la década de los sesenta y los setenta, fruto de la crisis de régimen franquista, tuvo un efecto evidente en la movilización social de regiones como Andalucía, Galicia o Albacete. Andalucía fue la primera de estas tres regiones a la que llegó la oleada de huelgas y protestas. Ya en 1962 la negociación de convenios propició revueltas de jornaleros en puntos como la campaña del Guadalquivir o en municipios cordobeses. Tuvo gran relevancia nacional el caso de la huelga de la construcción de Granada en julio de 1970. La represión policial dejó a tres trabajadores muertos, lo que provocó manifestaciones de solidaridad a lo largo de todo el país, evidenciando que un conflicto local tenía la capacidad de convertirse en nacional en un contexto generalizado de protesta. Además, algunas provincias como la de Jaén, donde la movilización social había sido menor, abandonaron a principios de los setenta el carácter idílico que le habían venido otorgando las autoridades franquistas⁷⁴. En Albacete uno de los primeros conflictos organizados vino desde el sector de la banca con motivo de la negociación de convenios de 1969. Este caso evidencia como en ocasiones la iniciativa vino de mano de trabajadores que se percibían más como clase media que como clase obrera⁷⁵. Pero fue en la entrada de la década de los setenta cuando empezaron a proliferar los conflictos en esta provincia: en torno a las concentraciones parcelarias en Cenizate (junio de 1972), por la equiparación salarial en la industria del calzado de Almansa (1973), contra la entrega vinícola obligatoria en Almansa (septiembre 1974) o las

⁷³ Daniel Lanero Táboas y Daniela Fernández Pérez, “El arte de saber durar... Sobre la continuidad de los poderes locales en la Galicia rural entre Franquismo y democracia (1973-1979)”, *Historia Política* 40 (2018): 336-345; y Daniela Fernández Pérez y Daniel Lanero Tabóas, “Adaptarse o desaparecer: estrategias de consolidación de los poderes locales franquistas en la Galicia de la Transición”, en *El disputado voto de los labriegos*, ed. Daniel Lanero (Granada: Editorial Comares, 2018): 45-50.

⁷⁴ Teresa María Ortega López, “La protesta en el Sur, conflictividad laboral y oposición sindical en Andalucía bajo la dictadura franquista, 1958-1975”, en *Revista de estudios regionales* 72 (2005): 130-131; y Teresa María Ortega López, “Campesinos y jornaleros bajo el Franquismo. Represión, disenso y conflictividad en el campo español, 1939-1975”, en *La España rural, siglos XIX y XX. Aspectos políticos, sociales y culturales*, eds. Teresa María Ortega López y Francisco Cobo Romero (Granada: Editorial Comares, 2011): 305-307.

⁷⁵ Óscar Martín García, “<<Este banco me debe dinero>> Protesta, identidades y oportunidades en el sector de la banca albacetense en los años sesenta”, *Pasado y memoria. Revista de Historia Contemporánea* 5 (2006): 135-148.

trabajadoras de la confección exigiendo un convenio propio en Albacete (1978)⁷⁶. Por último, en Galicia, Ana Cabana Iglesia, Alba Díaz Geada, Daniel Lanero Taboas, André Tadoada Casteleiro y Víctor Manuel Santidrián Arias agrupan la protesta social en tres tipos, derivada de la crisis de la industrialización de la agricultura, ambiental y mixta⁷⁷. Fueron numerosos los conflictos de todo tipo durante los sesenta y, sobre todo, la primera década de los setenta. En el primer bloque se pueden agrupar los relativos a la contestación contra la cuota empresarial de la SSA, o las “guerras agrarias” en torno a la leche y las patatas. Conflictos ambientales fueron aquellos relacionados con la explotación de minas y arenas, con la construcción de la central nuclear de Xove (Lugo) o con la construcción de la Autopista del Atlántico. Mixtas serían la protesta contra la concentración parcelaria o por la devolución de los Montes Vecinales en Mano Común⁷⁸. Este aumento generalizado de la protesta mereció la atención de las autoridades franquistas, que mostraron en varias ocasiones su gran preocupación por el “clima de tensión” y por las demandas de democracia y libertades. En Albacete, esta neurosis provocó el cese del delegado provincial sindical en marzo de 1976 con la intención de “devolver a los descarriados a la buena senda”⁷⁹.

Es evidente que a lo largo de la década de los sesenta estaban teniendo lugar una serie de cambios en España que significaron la apertura de la estructura de oportunidad política para aquellos sectores antifranquistas o para sectores sociales que se sintiesen agraviados por políticas concretas. Como consecuencia se activó un periodo de conflictividad social que no se limitó a las zonas urbanas e industriales, sino que también tuvo una gran incidencia en el campo, donde fueron muy numerosos los grupos que dentro de sus comunidades rurales vieron la oportunidad para solucionar, mediante el conflicto, situaciones políticas y sociales que percibían como

⁷⁶ Manuel Ortiz Heras, “Los movimientos sociales en la recuperación de la democracia: Castilla-La Mancha, 1962-1983”, en *La sociedad española en la Transición. Los movimientos sociales en el proceso democratizador*, ed. Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz (Madrid: Biblioteca Nueva, 2011), 376-377.

⁷⁷ Ana Cabana Iglesia, Alba Díaz Geada, Daniel Lanero Taboas, André Taboada Casteleiro y Víctor Manuel Santidrián Arias, “Dinámicas políticas de la sociedad rural gallega: entre la agonía de la dictadura y la implantación de la democracia (1970-1978)”, *Historia del presente* 21 (2013); 123-144.

⁷⁸ Ana Cabana y Daniel Lanero, “Movilización social en la Galicia rural del Tardofranquismo (1960-1977)”, *Historia Agraria* 48 (agosto 2009): 111-132; y Daniel Lanero, ed., *Por surcos y calles. Movilización social e identidades en Galicia y País Vasco (1968-1982)* (Madrid: Catarata, 2013).

⁷⁹ Óscar J. Martín García, “<<Un deprimido trozo de España>>. La lucha por la democracia en una provincia subdesarrollada”, en *La Transición se hizo en los pueblos: el caso de la provincia de Albacete*, coord. Manuel Ortiz Heras (Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 2016): 182-183.

un agravio. Por tanto, se puede afirmar con rotundidad que la movilización social durante el tardofranquismo y la Transición llegó a todos los rincones de España y no se limitó a las provincias dependientes del sector secundario y terciario, sino que también tuvo amplios efectos en regiones eminentemente agrarias como Galicia, Albacete o Andalucía.

2.2. ACTORES Y FORMAS DE LA PROTESTA

La protesta en el mundo rural se caracterizó por ser muy variada. En algunas ocasiones estuvo marcada por lógicas externas, pero en otras se definió a través de formas propiamente endógenas. Esto se ve claramente atendiendo a los actores de la protesta. Los sindicatos y partidos fueron personajes protagonistas en la movilización de poblaciones rurales. Desde partidos y sindicatos de clase como el PCE o las CCCC a partidos y sindicatos nacionalistas como Unión do Povo Galego (UPG) o las Comisións Labregas (CCLL) movilaron sus recursos para conseguir una fuerte implantación en el medio rural. Dentro de estas organizaciones se va a distinguir entre sindicatos y partidos con implantación nacional y entre sindicatos que solo operan a nivel local. En el primer caso entran el PCE, el PSOE y la CNT. En el segundo caso se van a analizar el sindicato nacionalista gallego CCLL.

El PCE adaptó su política de “reconciliación nacional” al campo intentando promover una identidad colectiva común entre sectores tan heterogéneos como los jornaleros y los pequeños y medianos propietarios. Este movimiento era percibido como necesario para crear una base de simpatizantes potencialmente amplia y no quedar aislados en pequeños grupúsculos. Por tanto, se intentaba potenciar un movimiento interclasista en el que la solidaridad de grupo se oponía al Franquismo y a las oligarquías económicas, los verdaderos enemigos, pues la “dictadura fascista [es la] que con su política anti campesina, permite y protege a las grandes compañías comercializadoras de los productos agropecuarios, a que exploten de manera canallesca a los campesinos pagándoles precios irrisorios por sus productos”⁸⁰. La única solución a esta situación de injusticia era la movilización de jornaleros y campesinos para conseguir un reparto de la riqueza más justo. Las CCCC, rama en

⁸⁰ Francisco Cobo Romero y María Candelaria Fuentes Navarro, “Los comunistas, la democracia y el campo. El <<asamblearismo campesino>> y la difusión de valores democráticos entre la sociedad rural, 1962-1975”, en *La España rural, siglos XIX y XX. Aspectos políticos, sociales y culturales*, eds. Teresa María Ortega López y Francisco Cobo Romero (Granada: Editorial Comares, 2011): 343.

rural de CCOO, se involucraron en la protesta contra el pago de la cuota empresarial de la SSA. Este conflicto surgió en 1971 por la inclusión de un nuevo impuesto a los trabajadores agrarios por cuenta propia que pasaban a ser considerados empresarios. El aumento impositivo, y que no se veía que repercutiese en una mejora de los servicios prestados por el Estado, generó un gran descontento que se proyectó en una fuerte movilización social gracias a la fuerza de los agricultores y a la organización de los sindicatos. Este conflicto se fue configurando a través de la interacción entre comunidades rurales y organizaciones sindicales. En un panfleto de las CCCC que llama a “non pagar” se aprecian perfectamente las líneas principales de los procesos enmarcadores del PCE en el campo: una situación de injusticia, “os campesiños xa estamos fartos de aguarar inxusticias (...) encima volven con iste imposto que non dá dereito a nada”; un enemigo culpable de dicha situación, “caciques” y “esquiroles”; y la forma de solucionar dicha situación, “dirixámos cartas as autoridades, a prensa, facendo conocer a nosa decisión de NON PAGAR. Impidamos a presenza dos recaudadores nos nosos pobos. Esixamos os novos membros das Hermandades que collan dunha vez a defensa verdadeira dos labregos”. Además, en este caso se evidencia muy bien cómo las CCCC, por su vinculación al PCE, hacen referencia a actores políticos externos a los agricultores que también están participando en la lucha antifranquista, “contamos nesta loita co importantísimo apoio de curas, maestros, abogados, obreiros das cidades, médicos e outros”⁸¹. Es evidente que este discurso tuvo éxito porque fue asumido por amplios sectores sociales que no tenían que estar necesariamente vinculados al PCE. En la localidad de Cenizate (Albacete), en 1972, los agricultores se vieron legitimados para interrumpir los trabajos de concentración parcelaria alegando que no promovían la justicia social y que solo beneficiaba a los poderosos⁸². Por otro lado, toda esta retórica se vinculó a una reivindicación históricamente muy fuerte con el “mito” de la reforma agraria como forma de mantener una fuerte identidad jornalera. El objetivo de esta

⁸¹ Víctor Manuel Santidrián Arias, “Resistencia fiscal y “guerras agrarias”: la movilización del campesinado gallego ante la lógica industrializadora”, en *Por surcos y calles. Movilización social e identidades en Galicia y País Vasco (1968-1982)*, ed. Daniel Lanero (Madrid: Catarata, 2013): 112-113; y Ana Cabana Iglesia y Alba Díaz-Geada, “Más allá de un baile de papeletas: acción colectiva, sindicalismo democrático y comportamiento electoral en la Galicia rural de la Transición”, en *Por surcos y calles. Movilización social e identidades en Galicia y País Vasco (1968-1982)*, ed. Daniel Lanero (Madrid: Catarata, 2013): 42-43.

⁸² Óscar J. Martín García, *A tiantas con la democracia. Movilización, actitudes y cambio en la provincia de Albacete, 1966-1977* (Madrid: Catarata, 2008), 67.

reforma agraria era la realización de la tradicional consigna de “la tierra para quien la trabaja”, un remedio que debía quedar plasmado en la expropiación de los ricos propietarios latifundistas y su posterior entrega a los jornaleros desposeídos. Así lo señalaba el órgano de expresión comunista *La Voz del Campo*:

“Bajo la dictadura ni el problema del paro agrícola ni ninguno de los problemas del campo tienen solución auténtica. No la tienen porque la solución auténtica de estos problemas exige terminar con la injusta distribución de la tierra, poniendo en manos de los obreros agrícolas y de los campesinos pobres la tierra de la aristocracia”⁸³

Esta reivindicación tuvo mucha fuerza en regiones como Andalucía, donde todavía existía una fuerte identidad jornalera, y se tradujo en la posterior consecución de votos en aquellas zonas donde había más jornaleros⁸⁴. Además, la organización a través de asambleas campesinas funcionó como creadora de espacios de aprendizaje democrático que promovieron la vinculación de las demandas sociales con las demandas políticas. La Primera Asamblea General de las Comisiones Agrícolas Campesinas se reunió en Madrid en mayo de 1970 y puso sobre la mesa sus principales reivindicaciones: reforma agraria, “la tierra para quien la trabaja”, oposición a “un sistema de tributación injusto”, la equiparación salarial entre obreros industriales y agrícolas y reivindicaciones encaminadas a proteger a los sectores más castigados (salario de 300 pesetas, seguro de paro, etc)⁸⁵. Pero el éxito del PCE no tuvo que ver solo con el éxito de sus procesos enmarcadores, también tuvo mucho que ver con su capacidad organizativa. Su predominio en la lucha antifranquista no suponía que la ideología comunista fuese hegemónica ni mucho menos dentro de la oposición. La mayoría de los militantes no se unían al partido porque fuesen comunistas, este no era el elemento aglutinador, sino las redes personales tejidas alrededor de los líderes

⁸³ Francisco Cobo Romero, “Movimientos sociales y construcción de la democracia en Andalucía, 1958-1983. Propuestas para un debate”, en *La sociedad española en la Transición. Los movimientos sociales en el proceso democratizador*, coord. Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz (Madrid: Biblioteca Nueva, 2011): 343.

⁸⁴ *Ibidem*, 49-50.

⁸⁵ Francisco Cobo Romero y María Candelaria Fuentes Navarro, “Los comunistas, la democracia y el campo. El <<asamblearismo campesino>> y la difusión de valores democráticos entre la sociedad rural, 1962-1975”, en *La España rural, siglos XIX y XX. Aspectos políticos, sociales y culturales*, eds. Teresa María Ortega López y Francisco Cobo Romero (Granada: Editorial Comares, 2011): 345-350.

espontáneos y, sobre todo, la capacidad de ofrecer una organización clandestina eficaz en un momento en el que esto era la primera prioridad política⁸⁶.

El PSOE no fue una fuerza a tener en cuenta en las movilizaciones de los sesenta. Pero la situación cambió a raíz del Congreso de Suresnes de octubre de 1974, que supuso la renovación del partido por gente del interior frente a la vieja guardia del exilio. Esta renovación se tradujo en una mayor preocupación socialista por su proyección “desde abajo” y por combatir en un espacio que hasta entonces estaba prácticamente copado por los comunistas. Esta nueva estrategia no fue ajena al mundo rural. En Albacete, el PCE se empezó a reestructurar a partir de 1973 y hasta 1976 mantuvo el monopolio de la lucha organizada en la provincia. Pero a partir de mayo de ese mismo año el PSOE consiguió construir una base organizativa formada por militantes socialistas y ugetistas que tuvo su primer movimiento de relevancia con la celebración del Congreso Provincial de diciembre. La implantación del PSOE y su rápido ascenso tras la muerte de Franco tuvo mucho que ver con su mayor aceptación por parte de las élites provenientes del Franquismo como estrategia para debilitar al PCE y por su apariencia más moderada como alternativa de gobierno. Pero también tuvo que ver con los esfuerzos que hicieron para combatir la hegemonía de los sindicatos comunistas mediante un proceso discursivo y organizativo. El partido, consciente de que el relato del obrerismo de las grandes ciudades no tenía validez en el campo, se centró en una retórica más agraria y promovió la implantación de la sección agraria de la UGT, la Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT). La necesidad de ampliar sus bases sociales y su vinculación con un discurso de “modernización” llevó a los socialistas a intentar atraerse a pequeños y medianos propietarios. Enrique Ballesterero, diputado del PSOE por Badajoz, señalaba en 1979 que “todavía hay que repetir machaconamente en los mítines de los pueblos algo tan elemental como que los socialistas no van a quitar las tierras y el ganado a los pequeños y medianos agricultores”. Pero esto se hizo sin abandonar en ningún momento el interés de los asalariados. Entendían que sus intereses no eran para nada antagónicos y se podían aunar en la defensa de la equiparación de sus niveles de vida a los de los trabajadores de otros sectores. Además, coincidían en la necesidad de diferenciar dos fases de actuación. Por un lado, medidas a corto plazo encaminadas

⁸⁶ Joe Foweraker. *La democracia española. Los verdaderos artífices de la democracia en España* (Móstoles: Arias Montanos Editores, 1990): 63-64.

a democratizar el país, y, por el otro, medidas a largo plazo de carácter estructural que siempre aparecieron reflejadas de forma más difusa. Es en este último sentido donde los socialistas recogieron la tradicional reclamación de la reforma agraria, pero sin ningún rasgo revolucionario y como fruto de la futura “modernización”. En cuanto a los esfuerzos organizativos, el problema vino con la diferencia de ideas en torno a si acoger a los pequeños propietarios en el FTT o si intentar aumentar su fuerza dentro de las Uniones de Agricultores y Ganaderos (UAGAS), eminentemente comunistas. Finalmente se decidió seguir combatiendo dentro de las UAGAS donde la implantación socialista era alta y potenciar la FTT en el resto del país. Pero lo que hace que finalmente el PSOE se imponga como principal fuerza de oposición en el campo español es la oportunidad de promover leyes para mejorar la vida de los campesinos a partir de las elecciones de junio de 1977⁸⁷.

Aunque la CNT nunca alcanzó la relevancia que pudieron tener el PCE durante el tardofranquismo o el PSOE durante la Transición, es instructivo señalar algunas de sus principales características sobre todo porque evidencian el desarrollo de un modelo totalmente opuesto a las fuerzas políticas anteriormente citadas. En la primera mitad de los años setenta ya existieron esfuerzos para refundar la CNT, pero no llegó a provincias como Andalucía hasta 1975. Aunque desde el sindicato se ha intentado explicar su escasa implantación en este momento como consecuencia de una mayor presión represiva que en el resto de las organizaciones, tanto Rubén Vega García como Antonio Ramírez Navarro coinciden en que los factores explicativos son mucho más diversos. Se pueden organizar en fruto de la estructura de oportunidad, de las estructuras de movilización y de los procesos enmarcadores. El maximalismo discursivo y el apoliticismo revolucionario (procesos enmarcadores) de la CNT no fueron bien recibidos en un contexto de desarrollo de clases medias, respecto a la década de los años treinta, y de ilusión y confianza democrática después de una larga dictadura y tantos esfuerzos por conseguir votar (estructura de oportunidad). Además, los cenetistas se autoexcluyeron del proceso político y social rechazando su participación en las nuevas plataformas legales para la acción sindical (estructuras de

⁸⁷ Sergio Molina García, “<<¡Fuera las caretas!>> Creación y consolidación de los partidos políticos en Albacete en el inicio de la Transición”, en *La Transición se hizo en los pueblos: el caso de la provincia de Albacete*, coord. Manuel Ortiz Heras (Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 2016): 114-120; y Antonio Herrera González de Molina, “Los socialistas y la construcción de la democracia en el mundo rural durante la Transición política, 1975-1986”, en *La España rural, siglos XIX y XX. Aspectos políticos, sociales y culturales*, eds. Teresa María Ortega López y Francisco Cobo Romero (Granada: Editorial Comares, 2011): 358-369.

movilización) y rechazando el consenso porque “todo pacto en que la clase obrera no sea hegemónica es el pacto del león con la oveja”⁸⁸. Por todo esto su afiliación fue baja y empezó a caer todavía más a partir de 1978, lo que hizo que cada vez fuesen más recurrentes los repertorios de protesta violentos como el atentado contra la discoteca *Scala* de Barcelona en enero de 1978 o el atraco a dos bancos en Almería en junio de 1979. Aunque no es la intención de este trabajo, podría ser enriquecedor profundizar sobre si este fenómeno responde a la afirmación de Sidney Tarrow y Donatello Della Porta de que la violencia organizada aumenta cuando decae la movilización como estrategia para solventar la competencia contra las diferentes organizaciones⁸⁹.

Las CCLL surgieron en 1973 bajo el impulso renovador estratégico de UPG. Esta organización sindical de carácter nacionalista se desarrolló al calor de los principales conflictos del momento en Galicia: abolición de la cuota empresarial de la SSA, “guerras agrarias”, recuperación de los Montes Vecinales en Mano Común y rechazo a la construcción de embalses. Las CCLL se incorporaron a la defensa de los pequeños y medianos agricultores contra la cuota empresarial cuando CCCC ya llevaba años en el conflicto, por lo que no tuvo tanta repercusión, pero aprovecharon las reuniones informales que realizaban muchos agricultores para insertar sus reivindicaciones. Lo nuevo que aportaron a este conflicto en concreto fue la intención de explicarlo como un problema en base nacionalista, refiriéndose constantemente a la condición de Galicia “como colonia del Estado”⁹⁰. Las “guerras agrarias” consistieron en múltiples conflictos que se desarrollaron a lo largo de la geografía

⁸⁸ Antonio Ramírez Navarro, “La difícil transición de los anarquistas. La reorganización de la CNT en Andalucía”, en *Movimientos sociales e instituciones locales en la Transición. La lucha por la democracia en la Andalucía rural*, eds. en Rafael Quirosa-Cheyrouze y Mónica Fernández Amador (Madrid: Catarata, 2017): 172.

⁸⁹ D. Della Porta y S. Tarrow, “Unwanted Children: Political Violence and the Cycle of Protest in Italy, 1966-1973” en Ignacio Sánchez-Cuenca y Paloma Aguilar Fernández, “Violencia política y movilización social en la Transición española”, en *Violencia y transiciones políticas a finales del siglo XX. Europa del Sur – América Latina*, eds. Sophie Baby, Olivier Campagnon y Eduardo González Calleja (Madrid: Casa de Velázquez, 2009): 96. Sobre la CNT: Antonio Ramírez Navarro, “La difícil transición de los anarquistas. La reorganización de la CNT en Andalucía”, en *Movimientos sociales e instituciones locales en la Transición. La lucha por la democracia en la Andalucía rural*, eds. en Rafael Quirosa-Cheyrouze y Mónica Fernández Amador (Madrid: Catarata, 2017): 164-181; y Rubén Vega García, “Contra corriente. El sindicalismo radical en la Transición”, en *La sociedad española en la Transición. Los movimientos sociales en el proceso democratizador*, coord. Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz (Madrid: Biblioteca Nueva, 2011): 188-191.

⁹⁰ Ana Cabana Iglesia, Alba Díaz Geada, Daniel Lanero Táboas, André Taboada Casteleiro y Víctor Manuel Santidrián Arias, “Dinámicas políticas de la sociedad rural gallega: entre la agonía de la dictadura y la implantación de la democracia (1970-1978)”, *Historia del presente* 21 (2013), 131-132.

española por parte de los pequeños y medianos propietarios que querían conseguir unos precios mínimos establecidos para sus productos. En Galicia se articularon en torno a la leche y la patata y solo los sindicatos nacionalistas participaron activamente. Las principales formas de denunciar una situación que consideraban injusta fueron el boicot y la destrucción intencionada de su propia mercancía para dejar claro que no ganaban suficiente al venderla⁹¹. El conflicto por la devolución a la comunidad de los Montes Vecinales en Mano Común tenía sus orígenes en el siglo XIX y ya en los años cuarenta del siglo XX empezó a cobrar fuerza frente a las primeras repoblaciones. Pero es con las luchas de la década de los sesenta cuando adquirió la fuerza suficiente para conseguir que se aceptase la propiedad vecinal en 1968 (aunque las limitaciones de dicha ley extenderían el conflicto más allá de la década de los setenta)⁹². Por último, la lucha contra la construcción de embalses se articuló como una defensa de las comunidades rurales por sus derechos y, en general, se vio alimentada por un fuerte impacto simbólico (pérdida de puntos de referencia en la vida comunitaria, separación de los vecinos con la zona de trabajo, etc). También tuvo un fuerte carácter de clase, pues una de las principales denuncias fue la escasez de las compensaciones económicas y su cantidad socialmente diferenciada en función del estatus y la posición económica de los afectados⁹³. Por tanto, el partido nacionalista UPG usó la herramienta de las CCLL como elemento movilizador de la población rural y como forma de penetración de las ideas nacionalistas en el campo. Para ocupar un espacio en el sindicalismo de clase tuvo que enfrentarse con el PCE por la confianza de los vecinos, para lo que emplearon repertorios de protesta similares y se implicaron en conflictos como los anteriormente nombrados. Pero la gran diferencia que les alejaba de los comunistas estaba en que la CCLL intentó crear un sentimiento nacionalista en el que se presentase el mundo rural como esencia de la identidad nacional. Lo contradictorio era que, a pesar de que el mundo rural era el supuesto guardián de las esencias patrias, hicieron la lectura de que el campesinado gallego no podía

⁹¹ Víctor Manuel Santidrián Arias, “Resistencia fiscal y “guerras agrarias”: la movilización del campesinado gallego ante la lógica industrializadora”, en *Por surcos y calles. Movilización social e identidades en Galicia y País Vasco (1968-1982)*, ed. Daniel Lanero (Madrid: Catarata, 2013): 119-122.

⁹² Araceli Freire Cedeira, “El proceso de devolución de los Montes Vecinales en Mano Común: una historia de lucha social por los recursos naturales, 1968-1989”, en *Por surcos y calles. Movilización social e identidades en Galicia y País Vasco (1968-1982)*, ed. Daniel Lanero (Madrid: Catarata, 2013): 70-80.

⁹³ Ana Cabana Iglesia, Alba Díaz Geada, Daniel Lanero Táboas, André Taboada Casteleiro y Víctor Manuel Santidrián Arias, “Dinámicas políticas de la sociedad rural gallega: entre la agonía de la dictadura y la implantación de la democracia (1970-1978)”, *Historia del presente 21* (2013), 127.

movilizarse por sí solo y necesitaba de agentes externos para organizarse. En un documento interno del partido se afirmaba que “consideramos que pra crear un movemento agrario tén que ser en principio promovido por xente que teña uns coñecementos superiores e que traballe direutamente cos labregos (cura, mestres, técnicos rurás, asistentes sociás, etc.)”⁹⁴.

A pesar de que las organizaciones sindicales no consiguieron reclutar a una gran masa de afiliados, sus relaciones con organizaciones políticas y el contexto de conflictividad ayudó a que en muchas ocasiones tuviesen éxito. Por tanto, es evidente que el papel jugado por los partidos políticos y los sindicatos agrarios ayudó a la democratización en el campo. Pero esto no puede traducirse en que no se preste atención al desarrollo interno de las propias comunidades rurales para evitar simplificar un proceso que fue mucho más complejo. En la mayoría de los casos no fueron los sindicatos los que iniciaron las protestas, sino que se adhirieron a aquellas luchas iniciadas por diferentes actores rurales. Aunque la lucha contra la construcción de una central nuclear en Xove fue iniciada en 1973 por los vecinos del pueblo, los partidos y sindicatos nacionalistas y de izquierdas no se unieron hasta 1977⁹⁵. Por tanto, en el espacio de las comunidades rurales también participaron actores estrictamente endógenos. Aquí se va a hacer mención de algunos ejemplos como el SOC, la prensa local, los propios trabajadores sin sindicarse o la comunidad rural como espacio de experiencias compartidas.

El SOC se fundó en Antequera en agosto de 1976 con una identidad jornalera unida a un cierto sentimiento de pertenencia a una nación-región propia. Además, su nacimiento en un contexto de apertura política favoreció que se diese una gran importancia a la reivindicación de libertades políticas, aunque no exclusivamente (expropiación de tierras sin cultivar, seguro de desempleo, edad de jubilación a los 60 años, etc). Como otros sindicatos de clase, también combinaron reivindicaciones

⁹⁴ Fernando Molina y Antonio Míguez, “Boinas, zuecos y política. Rerruralziación ideológica e identitaria española, gallega y vasca en el franquismo y la Transición”, *Por surcos y calles. Movilización social e identidades en Galicia y País Vasco (1968-1982)*, ed. Daniel Lanero (Madrid: Catarata, 2013): 230-231; y Víctor Manuel Santidrián Arias, “Resistencia fiscal y “guerras agrarias”: la movilización del campesinado gallego ante la lógica industrializadora”, *Por surcos y calles. Movilización social e identidades en Galicia y País Vasco (1968-1982)*, ed. Daniel Lanero (Madrid: Catarata, 2013): 127-129.

⁹⁵ Ana Cabana Iglesia, Alba Díaz Geada, Daniel Lanero Táboas, André Taboada Casteleiro y Víctor Manuel Santidrián Arias, “Dinámicas políticas de la sociedad rural gallega: entre la agonía de la dictadura y la implantación de la democracia (1970-1978)”, *Historia del presente* 21 (2013), 127.

mínimas, como la lucha por los subsidios, con otras máximas, como la lucha por la tierra. Esta última les hizo recurrir a la ocupación de tierras de terratenientes y, aunque no tuvieron éxito en lo estrictamente material, por la reacción de las fuerzas del orden, sí consiguieron poner sobre la mesa el debate sobre la estructura de la propiedad y llegar a la opinión pública a través de los medios de comunicación. Pero lo que fue más importante para la consolidación de esta organización fue que encontraron un aglutinante que les permitiese arraigar en muchos pueblos de carácter jornalero gracias a que supieron recoger las preocupaciones de los trabajadores del campo y darles una respuesta satisfactoria combatiendo lo que entendían como el principal problema común, el paro. En cuanto a la organización, desde el principio fueron conscientes que no podían limitarse a importar modelos ajenos. En lugar del modelo de comisiones, que reconocían útil para las ciudades, adoptaron una forma de funcionar diferente: “teníamos que formar un sindicato clandestino, en base a núcleos jornaleros, reconocidos por todos como dirigentes de cada pueblo, que serían los encargados de formar los organismos y de planificar las luchas”⁹⁶. Por tanto, se puede ver cómo una estructura de oportunidades más limitada favorece estructuras organizativas menos participativas y más cerradas en sí mismas.

Igual que el ámbito nacional, en el local la prensa también funcionó como micrófono para las luchas democráticas y por la libertad de expresión. El periódico *La Verdad* de Albacete fue inaugurado en 1973 y actuó como un altavoz de las minorías y de los descontentos frente a *La Voz de Albacete*, el diario del Movimiento. Como sugieren McCarthy, Smith y Zald, los medios de comunicación son “capaces de llegar a una audiencia mucho mayor de la que pueden alcanzar los actores de los movimientos sociales por sí mismos”⁹⁷. Esto fue lo que ocurrió con el caso que aquí se presenta y por eso los agricultores de Villamalea llegaron a agradecer por carta a la dirección la “preocupación que sentimos por la población” debido al apoyo que este demostró a la cooperativa del pueblo en su conflicto con las autoridades por la Entrega

⁹⁶ Javier García Fernández y Néstor Salvador Galindo, “Movimientos sociales, protesta jornalera y democratización del mundo rural: el caso del SOC”, en *Movimientos sociales e instituciones locales en la Transición. La lucha por la democracia en la Andalucía rural*, eds. en Rafael Quirosa-Cheyrouze y Mónica Fernández Amador (Madrid: Catarata, 2017): 64-78.

⁹⁷ J. McCarthy, J. Smith y M. Zald, “El acceso a la agenda pública y a la agenda de Gobierno: medios de comunicación y sistema electoral”, en *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*, eds. J. McCarthy y M. Zald (Madrid: Istmo, 1999), 414, en Óscar J. Martín García, *A tientas con la democracia. Movilización, actitudes y cambio en la provincia de Albacete, 1966-1977* (Madrid: Catarata, 2008), 165.

Vínica Obligatoria⁹⁸. Un proceso similar tuvo lugar en Almería, donde también en 1973 nació el periódico *Ideal* como alternativa al oficialista *La Voz de Almería*. Movimientos como las asociaciones de vecinos encontraron en este medio una plataforma desde la que plantear sus problemáticas y reivindicaciones. Así lo recordaba el delegado de *Ideal* en Almería en una entrevista en 2017:

“Manolo [Gómez Cerdeña] empieza a moverse por todos los barrios y así salía el *Ideal* unos días hablando de los Ángeles, otro día de La Chanca, otro día del Barrio Alto... y salía un reportaje hablando con los vecinos. Y entonces ya los vecinos empezaron a ir a la redacción para pedirnos que fuéramos a sus barrios para ver sus problemas de agua, de luz, de basura...”⁹⁹

Además, a finales de los setenta también surgieron revistas con un perfil más crítico y combativo que ayudaron a dar difusión a nuevos debates que no habían tenido tanta relevancia en el proceso de construcción democrático. La revista *Naif y Almería Semanal* pusieron sobre la mesa cuestiones sobre la liberación sexual femenina, el aborto o la violencia de género, lo que aumentó la visibilidad de nuevas organizaciones feministas almerienses como la Asociación para la Promoción de la Mujer o el Movimiento Democrático de Mujeres. También las personas con diversidad funcional y sus familiares crearon organizaciones como la Asociación de Padres, Madres y Protectores de Personas con Discapacidad Intelectual de Almería o la Asociación Pro Deficientes del Suroeste de Almería y utilizaron los medios para intentar crear un discurso político en torno a una problemática que hasta entonces era considerada exclusivamente privada¹⁰⁰.

Aunque los sindicatos tuvieron una importancia central a la hora de organizar a los trabajadores descontentos y de funcionar como plataforma desde la que hacer más sonadas sus reivindicaciones, no fueron pocos los casos en los que los trabajadores y las trabajadoras provinciales no necesitaron de estas organizaciones para plantear una protesta organizada. Más arriba ya se han citado casos en los que los trabajadores iniciaron unas movilizaciones a las que estos se sumaron después,

⁹⁸ *Ibidem*, 162-172.

⁹⁹ Mónica Fernández Amador y Emilia Martos Contreras, “La prensa como plataforma de expresión de los problemas sociales durante la Transición”, en *Movimientos sociales e instituciones locales en la Transición. La lucha por la democracia en la Andalucía rural*, eds. Rafael Quirosa-Cheyrouze y Mónica Fernández Amador (Madrid: Catarata, 2017): 146.

¹⁰⁰ *Ibidem*, 140-160.

pero también hubo ejemplos en los que los sindicatos ni siquiera tuvieron presencia. Los trabajadores de la banca de Albacete se organizaron para evitar la proletarización de su sector, que consideraban como privilegiado, aprovechando la negociación de convenios de 1969. Desarrollaron formas de protesta originales para reducir los costes, como abandonar su aspecto físico o portar un pequeño pin con la frase “este banco me debe dinero”, y se aprovecharon de que no eran percibidos negativamente como obreros, por lo que sufrieron menos represión y tuvieron más abierto los cauces legales de protesta¹⁰¹. También las mariscadoras gallegas de los municipios de Marín y Poio se enfrentaron a las autoridades, sin necesidad de sindicatos, para protestar por la actividad de una fábrica de celulosa debido a los perjuicios causados al medio natural y al aprovechamiento económico de los recursos y por los riesgos potenciales a la salud pública¹⁰².

Por último, cabe señalar la comunidad rural como espacio que también actuó como un cierto actor creador de identidades y de procesos enmarcadores. Las dificultades económicas, las duras condiciones de vida y la incapacidad del sindicalismo oficial para satisfacer las demandas de los trabajadores fueron experiencias comunes a campesinos y jornaleros que facilitaron la creación de identidades y la solidaridad internas. Las fiestas y celebraciones comunitarias y populares también fueron una oportunidad para protestar y crear solidaridad a nivel local gracias a la tradición. Así ocurrió en 1972 cuando el alcalde de Villamalea intentó que no se celebrasen las fiestas de la Cooperativa San Antonio Abad y cientos de vecinos acudieron a su casa para gritarle y tirar petardos como forma de mostrar su descontento¹⁰³. Aunque no es el motivo de este estudio analizar a fondo esta cuestión, es útil señalar la capacidad de los espacios de vida para generar redes informales de sociabilidad que pueden ser aprovechadas por diversos actores políticos y sociales

¹⁰¹ Óscar Martín García, “<<Este banco me debe dinero>> Protesta, identidades y oportunidades en el sector de la banca albacetense en los años sesenta”, *Pasado y memoria. Revista de Historia Contemporánea* 5 (2006): 135-148.

¹⁰² Daniel Lanero, “Entre dictadura y democracia: la conflictividad socioambiental en las Rías Baixas (1959-1980)”, en *Por surcos y calles. Movilización social e identidades en Galicia y País Vasco (1968-1982)*, ed. Daniel Lanero (Madrid: Catarata, 2013): 143-149.

¹⁰³ Teresa María Ortega López, “La protesta en el Sur, conflictividad laboral y oposición sindical en Andalucía bajo la dictadura franquista, 1958-1975”, en *Revista de estudios regionales* 72 (2005): 125; y Óscar J. Martín García, *A tientas con la democracia. Movilización, actitudes y cambio en la provincia de Albacete, 1966-1977* (Madrid: Catarata, 2008), 70-71.

para crear formas de solidaridad y procesos enmarcadores sólidos vinculados a la comunidad.

Por tanto, a lo largo de este repaso por los actores de la protesta social en el campo durante el tardofranquismo y la Transición, parece evidente la dificultad de delimitar una línea marcada que separe a los partidos y a los sindicatos de los vecinos de las comunidades rurales. Esto seguramente se debe a que, a pesar del paternalismo que marcó a los primeros y su origen externo a las propias comunidades, fueron los agricultores y obreros de las provincias rurales los que participaron activamente como miembros de base de estas organizaciones. Además, es un error pensar que los campesinos se adhiriesen a los sindicatos sin ningún tipo de lógica propia. Hemos visto, y se evidencia muy bien en los casos del PCE y el PSOE, como el sindicalismo agrario tuvo que adaptar su discurso global a los problemas locales. Como recogen Ana Cabana Iglesia, Alba Díaz Geada, Daniel Lanero Táboas, André Taboada Casteleiro y Víctor Manuel Santidrián Arias:

“lo que resulta evidente es que las reivindicaciones sindicales son las reivindicaciones campesinas. Los que aspiran a convertirse en sus representantes parten de las demandas, protestas y preocupaciones de los agricultores. Los sindicatos hacen suyas estas pretensiones, las apoyan, ofrecen sus recursos de asesoramiento y organización, animan a la movilización, contribuyen a su conocimiento y a la amplificación de su dimensión y duración”¹⁰⁴

Pero para analizar cualquier ciclo de movilización también es necesario atender a los repertorios de protesta empleados. Además, el conflicto funciona como momento privilegiado para el desarrollo de marcos interpretativos y para la consolidación de identidades colectivas mediante la lucha de colectivos y las formas de solidaridad. El periodo de movilización que se inició en España en la década de los sesenta no surgió de la nada. Fue fruto de un descontento social que no era nuevo pero que se evidenciaba de formas menos visibles públicamente y de unas redes de sociabilidad propias de la vida cotidiana donde se fueron fraguando interpretaciones políticas comunes y fuertes lazos de solidaridad. Muestra de que había un descontento previo fueron las formas de protesta ocultas, lo que James Scott denomina “armas de los

¹⁰⁴ Ana Cabana Iglesia, Alba Díaz Geada, Daniel Lanero Táboas, André Taboada Casteleiro y Víctor Manuel Santidrián Arias, “Dinámicas políticas de la sociedad rural gallega: entre la agonía de la dictadura y la implantación de la democracia (1970-1978)”, *Historia del presente* 21 (2013), 135.

débiles”. Los vecinos de Lugo provocaron varios incendios intencionados como rechazo de la repoblación forestal franquista que buscaba favorecer a empresas papeleras y autoridades franquistas mostraron su preocupación en la localidad de Almansa por los perjuicios que suponía a la industria el gran aumento del absentismo laboral¹⁰⁵. Este descontento fue tomando forma en una “sociedad civil alternativa” que se construía alrededor de espacios de sociabilidad como salones parroquiales, cooperativas, tabernas de barrio, grupos vecinales, etc. Como señalaba un antiguo militante antifranquista: “aquellos [las excursiones, meriendas, competiciones deportivas, tertulias, asambleas, etc] parece que no tuvo importancia pero explica cómo nos hemos ido desarrollando después”. Por tanto, estas herramientas culturales fueron esenciales para mediar entre la estructura de oportunidad y la movilización, pues sirvieron para favorecer ciertas interpretaciones subversivas sobre los problemas sociales y políticos¹⁰⁶.

Estas experiencias pusieron las bases para que en las décadas de los sesenta y los setenta pudiesen desarrollarse formas de protesta abiertas que aprovecharon una nueva estructura de oportunidad política. En estos años surgieron nuevos repertorios de protesta que vinieron a complementar los antiguos, que no dejaron de usarse. En el ámbito rural fue común el uso de nuevos repertorios como huelgas, encierros, manifestaciones, tractoradas o conciertos. En Albacete, en 1976, aprovechando la feria, miembros del PCE organizaron un concierto con la presencia de varios artistas de izquierdas. Ante el riesgo de politización, las autoridades locales decidieron prohibir el evento, lo que provocó una manifestación espontánea que terminó con cargas policiales y detenciones¹⁰⁷. Se evidencia con este ejemplo cómo una actividad aparentemente inofensiva y ociosa como es un concierto podía transformarse en protesta si era insertada dentro de un marco político o si recibía

¹⁰⁵ Caso gallego: Teresa María Ortega López, “Campesinos y jornaleros bajo el Franquismo. Represión, disenso y conflictividad en el campo español, 1939-1975”, en *La España rural, siglos XIX y XX. Aspectos políticos, sociales y culturales*, eds. Teresa María Ortega López y Francisco Cobo Romero (Granada: Editorial Comares, 2011): 308. Caso albacentense: Óscar J. Martín García, *A tientas con la democracia. Movilización, actitudes y cambio en la provincia de Albacete, 1966-1977* (Madrid: Catarata, 2008), 50-51.

¹⁰⁶ Manuel Ortiz Heras, José Antonio Castellanos López y Óscar José Martín García, “Historia social y política para una Transición. El cambio desde abajo y la construcción de una nueva autonomía: Castilla-La Mancha”, *Historia Actual Online* 14 (otoño 2007), 118-119; y Óscar J. Martín García, “Entre la política, la economía y el discurso. La protesta contra la dictadura franquista en la provincia de Albacete, 1970-1976”, *Historia Contemporánea* 36 (2008): 205-207.

¹⁰⁷ Óscar J. Martín García, *A tientas con la democracia. Movilización, actitudes y cambio en la provincia de Albacete, 1966-1977* (Madrid: Catarata, 2008): 49-50.

respuestas represivas de las autoridades ante la supuesta politización. Pero esto no significó el abandono de formas tradicionales como el impago de impuestos, la ocultación de cosechas o el envío de quejas a las autoridades. De hecho, al menos antes de la muerte de Franco, solo se hizo uso de formas de acción directa cuando ya se habían agotado sin éxito las vías legales. El repertorio de protesta que se empleó en el conflicto en torno a la devolución de los montes comunales fue amplio y recurrió a todas las vías disponibles. En un primer momento los vecinos usaron herramientas administrativas y judiciales, pero por el fracaso continuado de sus reclamaciones se vieron obligados a pasar a la acción directa para evitar la inmediata ocupación. En el municipio coruñés de Mazaricos, en 1963, varios vecinos se opusieron a los trabajos de los ingenieros del Patrimonio Forestal y “al presentarse la Guardia Civil para proteger el trabajo, los vecinos persistieron en su actitud violenta y arrojaron piedras”¹⁰⁸. Aunque no tan fructífero como esperaban los agricultores, en este caso la vía administrativa y judicial fueron tan recurrentes por el apoyo de grupos ganaderos que estaban representados en el Estado franquista, lo que evidencia como el apoyo de las élites supone una oportunidad política muy ventajosa para cualquier protesta¹⁰⁹. Pero esto cambió en la década de los setenta con la crisis de régimen provocada por la muerte del dictador. Como señala Pablo Corral Broto, frente al lenguaje cuidado con el que los solicitantes se dirigían a las autoridades antes de los setenta, los nuevos recursos judiciales empezaron a tomar un discurso más exigente y menos rogante. Que se emplease el recurso legal-administrativo seguía suponiendo aceptar la legitimidad del estado franquista como intermediario para intervenir en los problemas de la ciudadanía, pero un tono más severo muestra una actitud más reivindicativa por parte de los solicitantes¹¹⁰. Por otro lado, el recurso a la acción directa permitió la colaboración de nuevos sujetos políticos como las mujeres, que por un lado no podrían haber participado mediante acciones judiciales por las restricciones legales y, además, la represión que sufrían solía ser menor al escudarse en un papel de madres

¹⁰⁸ Noticia del ABC en Alba Díaz-Geada, “Comunes, conflictos y demcoracias en el rural gallego contemporáneo. Apuntes para la reflexión”, en *El disputado voto de los labriegos*, ed. Daniel Lanero (Granada: Editorial Comares, 2018): 93-94.

¹⁰⁹ Araceli Freire Cedeira, “El proceso de devolución de los Montes Vecinales en Mano Común: una historia de lucha social por los recursos naturales, 1968-1989”, en *Por surcos y calles. Movilización social e identidades en Galicia y País Vasco (1968-1982)*, ed. Daniel Lanero (Madrid: Catarata, 2013): 70-80.

¹¹⁰ Pablo Corral Broto, “El inesperado <<ecologismo>> del campo español, 1939-1979”, en *El disputado voto de los labriegos*, ed. Daniel Lanero (Granada: Editorial Comares, 2018): 178-180.

y sustentadoras del hogar. Además, la protesta abierta cada vez se fue haciendo más habitual y llegó a emplearse sin recurso previo a la vía de la legalidad. Desde el 28 de marzo al 2 de abril de 1977, SOC, CNT y UGT promovieron una semana de lucha huelguística a lo largo de unos 170 pueblos andaluces para conseguir derechos laborales que les protegiesen del paro (plan de inversiones públicas en la región, seguro de desempleo, etc) y a principios de junio, varios pueblos de la sierra gaditana se pusieron en huelga por las malas condiciones laborales en la recogida de la remolacha. Finalmente, SOC y CCOO firmaron un convenio que garantizaba 1.200 pesetas diarias por ocho horas de trabajo y eliminación del destajo¹¹¹.

Estas nuevas formas de rebeldía y disidencia se fueron extendiendo y popularizando como forma de contestación social. La apertura de las oportunidades políticas permitía que cada vez fuesen más las personas que se atrevían a desafiar al régimen político de forma pública y visible. Los nuevos repertorios se expandieron por zonas rurales a través de canales de difusión de protesta. Óscar Martín García ejemplifica con algunos de estos canales para la provincia de Albacete. Emigrantes que se habían politizado en sus regiones de recepción, por lo general más industrializadas, y que volvían de vacaciones y difundían sus nuevas ideas subversivas, universitarios que volvían a Albacete después de haber estudiado en universidades fuera de su provincia, militantes de las JOC o el PCE a través de congresos interprovinciales en los que contactaban con compañeros de todo el país, etc. Todos estos, al regresar a sus hogares, llevaban consigo “libros y propaganda de matiz comunista” y “modelos para la acción colectiva, marcos maestros y estructuras de movilización” que abrieron nuevas vías de protesta social¹¹².

Fueron muchos y variados los actores sociales que actuaron de forma disidente en el campo español durante el tardofranquismo y la Transición. Los vecinos en ocasiones actuaron por sí solos, pero muchas veces se aprovecharon de la plataforma que suponían los sindicatos para poder conseguir sus reivindicaciones.

¹¹¹ Javier García Fernández y Néstor Salvador Galindo, “Movimientos sociales, protesta jornalera y democratización del mundo rural: el caso del SOC”, en *Movimientos sociales e instituciones locales en la Transición. La lucha por la democracia en la Andalucía rural*, eds. en Rafael Quirosa-Cheyrouze y Mónica Fernández Amador (Madrid: Catarata, 2017): 71-72.

¹¹² Óscar J. Martín García, *A tientas con la democracia. Movilización, actitudes y cambio en la provincia de Albacete, 1966-1977* (Madrid: Catarata, 2008), 174-176.

“Eu a maneira de entra no sindicalismo agrario foi a través dunhas xuntanzas que se fixeron nas parroquias, que é onde nos xuntabamos os veciños para formar o concello parroquial. E así foi onde eu comecei. Afiliáronse os veciños, case todos dos que estábamos na reunión e xa entrei a formar parte do sindicato alí. Despois gustoume o discurso que se nos presentou, evidentemente, e dalgunha maneira foi o comenzo de decadicarme ó sindicalismo. Nalquel momento o que se plantexaba era a loita contra a cuota empresarial, e aqeulo era algo moi rexeitado por todos os labregos”¹¹³

Es fundamental la idea de que los trabajadores rurales no dependieron de los sindicatos para definir su actuación. Estas instituciones no actuaron como vanguardia que dirigía a unos sujetos dispuestos a adherirse a sus reivindicaciones de máximos, sino que el traspaso de influencia entre sindicatos y sujetos rurales fue bidireccional. Sería exagerado plantear que los sindicatos no tuvieron nada que decir y que pusieron su capacidad organizativa en manos de los campesinos, no se pretende llegar tan lejos. Solo se quiere señalar que mientras que los sindicatos fueron actores fundamentales en la protesta rural y en muchas ocasiones promovieron un proyecto que iba más allá de estas comunidades, tuvieron que negociar, de forma consciente e inconsciente, con las bases sociales rurales para abordar sus principales temas de preocupación materiales y así poder demostrarse como plataformas útiles y deseables. Además, todos estos actores sociales combinaron nuevos y viejos repertorios de protesta para conseguir una serie de beneficios sociales y laborales a los que más adelante añadieron reivindicaciones de tipo políticas y democráticas.

2.3 LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA

Existe un amplio consenso sobre la importancia de los movimientos sociales en la construcción de la democracia española. Historiadores como Carme Molinero, Pere Ysàs, Xavier Doménech, Álvaro Soto Carmona o Javier Tusell otorgan en sus obras un peso protagónico a la movilización popular como fuerza democratizadora. Aunque la correlación de fuerzas nunca fue favorable para las fuerzas opositoras durante la dictadura, tras la muerte de Franco se abrió un nuevo marco de oportunidades políticas más favorable para el cambio que permitió un fuerte desarrollo de las reivindicaciones democráticas y por la libertad política. Según Óscar Martín García, si la ruptura democrática no fue posible fue debido, entre otras razones, al insuficiente

¹¹³ Alba Díaz-Geada, “Comunes, conflictos y democracias en el rural gallego contemporáneo. Apuntes para una reflexión”, en *El disputado voto de los labriegos*, ed. Daniel Lanero (Granada: Editorial Comares, 2018): 107.

nivel de movilización y protesta que tuvo lugar en las zonas menos desarrolladas, es decir, en provincias eminentemente rurales como las que aborda este estudio. Aun así, no se puede negar el gran incremento de conflictos en estas regiones, sobre todo a partir de 1975, “una irrupción que fue ejemplo de la extensión geográfica alcanzada por la ola democrática que recorrió España desde finales de 1975, y que abrió las compuertas para la democracia a nuestro país”¹¹⁴. Por tanto, se podría decir que el proyecto democrático no fue viable hasta que la movilización antifranquista no se levantó con fuerza en las provincias periféricas o, dicho de otro modo, que solo fue posible cuando esta movilización se extendió a las zonas rurales. La expansión de la protesta unida a un contexto de apertura política favoreció que a la lucha socioeconómica se uniese la lucha política por libertades democráticas. Como se ha ido insistiendo a lo largo de este trabajo, no fue con la muerte de Franco cuando se iniciaron gran parte de los conflictos, sino que se puede rastrear a nivel local hasta principios de la década de los sesenta, aunque sí que es cierto que a mediados de la década siguiente la protesta aumentó cuantitativa y cualitativamente. Los obreros metalúrgicos sindicados de Albacete solicitaron que su convenio fuese negociado por los “auténticos representantes de los trabajadores” y no por los burócratas de la Organización Sindical. Esto evidencia cómo los trabajadores cada vez consideraban que la legitimidad de las instituciones franquistas era menor y apostaban por apoyar a organizaciones con funcionamiento democrático. En abril de 1975, un grupo de maestros de EGB de Albacete rechazaban la representación del sindicato oficial y exigían la “creación de un órgano profesional totalmente representativo, independiente de la Administración y con audiencia a todos los niveles”. A esta reivindicación unieron las peticiones de la escolarización pública y gratuita, muestra de la gran vinculación entre las luchas sociales y las políticas de tinte democráticas¹¹⁵. Otro ejemplo es el conflicto en torno al impago de la cuota empresarial de la SSA. Aunque se había iniciado en 1971 y tenía una naturaleza estrictamente antifiscal, en el contexto de transición política se unieron otros elementos como la reivindicación democrática. En asambleas, reuniones o artículos de prensa, las organizaciones consiguieron ligar la

¹¹⁴ Óscar J. Martín García, “<<Un deprimido trozo de España>>. La lucha por la democracia en una provincia subdesarrollada”, en *La Transición se hizo en los pueblos: el caso de la provincia de Albacete*, coord. Manuel Ortiz Heras (Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 2016): 180-181.

¹¹⁵ Óscar J. Martín García, *A tientas con la democracia. Movilización, actitudes y cambio en la provincia de Albacete, 1966-1977* (Madrid: Catarata, 2008), 229.

lucha contra la cuota a la lucha por un nuevo régimen político. Muestra de que esta vinculación tuvo éxito es que allí donde los índices de impago eran mayores, también era donde mayor respaldo electoral tenían los sindicatos democráticos¹¹⁶. Por tanto, se puede afirmar que los sindicatos rurales fueron actores clave en la democratización del campo español. Otro factor importante fue la naturaleza del propio régimen franquista. Su condición dictatorial y represiva impedía cualquier tipo de canalización institucional de la protesta, lo que suponía en la mayoría de los casos una lucha por el control de la calle que terminaba en enfrentamientos con la policía, heridos y detenidos. Por tanto, cualquier manifestación, fueran cuales fueran sus motivos, tenía el potencial de acabar convirtiéndose en una manifestación contra el propio régimen político por la reivindicación de poder hacerlo libremente o por muestras de solidaridad antirrepresivas¹¹⁷. Incluso solicitar lugares de reunión se podía convertir en algo subversivo y que generase movilizaciones. Este fue el caso de Brenes (Sevilla), en octubre de 1969, donde tuvo lugar una concentración de más de cincuenta trabajadores en la puerta del sindicato oficial solicitando que se les permitiese realizar una reunión en su salón. Ante la negativa, los trabajadores se manifestaron por las calles repartiendo panfletos que exigían precios mínimos para la aceituna y el algodón, tema que se iba a tratar en la esperada reunión. Estos hechos provocaron la intervención policial y varios detenidos que fueron puestos en libertad al día siguiente por la solidaridad de los vecinos, que simpatizaban con las reivindicaciones de los trabajadores¹¹⁸. También las formas de organización actuaron como elemento democratizador. Las asambleas fueron espacios de micromovilización donde difundir las ideas antifranquistas y espacios de aprendizaje democrático. En estas asambleas se crearon solidaridades internas, se difundieron los procesos enmarcadores y se generaron identidades de grupo sólidas. Muchas pudieron tener lugar gracias a la actividad de los denominados curas obreros que cedían sus parroquias. Por eso Alba

¹¹⁶ Ana Cabana Iglesia y Alba Díaz-Geada, “Más allá de un baile de papeletas: acción colectiva, sindicalismo democrático y comportamiento electoral en la Galicia rural de la Transición”, en *Por surcos y calles. Movilización social e identidades en Galicia y País Vasco (1968-1982)*, ed. Daniel Lanero (Madrid: Catarata, 2013): 42-43.

¹¹⁷ Pablo Corral Broto, “El inesperado <<ecologismo>> del campo español, 1939-1979”, en *El disputado voto de los labriegos*, ed. Daniel Lanero (Granada: Editorial Comares, 2018): 192.

¹¹⁸ Francisco Cobo Romero y María Candelaria Fuentes Navarro, “Los comunistas, la democracia y el campo. El <<asamblearismo campesino>> y la difusión de valores democráticos entra la sociedad rural, 1962-1975”, en *La España rural, siglos XIX y XX. Aspectos políticos, sociales y culturales*, eds. Teresa María Ortega López y Francisco Cobo Romero (Granada: Editorial Comares, 2011): 337-338.

Díaz-Geada se refiere a este fenómeno como “democracia parroquial” donde “la injusticia sentida tornaba en experiencia de comprensión colectiva y en reivindicación democrática e identitaria”¹¹⁹. Así se hizo posible la construcción de una identidad antifranquista fuerte que se extendía por las luchas sociales y se unió a las reivindicaciones sociales y económicas.

Con la muerte de Franco no desapareció la represión de las manifestaciones y de los movimientos organizados. Por una parte, las protestas de la primera mitad de 1976 se centraron en acabar con la dictadura en aquellos enclaves a nivel local donde pretendía perpetuarse y fueron muy importantes en la caída del gobierno continuista de Carlos Arias Navarro. Pero por otro lado, la represión indiscriminada se mantuvo y el proceso de democratización se realizó en un contexto claramente represivo. Las élites reformistas no fueron pasivas ante el empuje de las fuerzas opositoras. En Albacete, el temor a que tuviesen éxito las manifestaciones del 12 de noviembre de 1976 contra la Ley para la Reforma Política se tradujo en detenciones preventivas de militantes comunistas, controles de carretera, charlas en centros educativos sobre las posibles consecuencias de participar en la manifestación, colaboración entre la policía y elementos ultraderechistas armados y gran número de detenciones¹²⁰. Tampoco fueron legalizadas muchas asociaciones de vecinos de la ciudad hasta después de las primeras elecciones generales. La asociación de vecinos Pedro Lamata se creó en septiembre de 1976, pero no fue legalizada hasta el 18 de junio de 1977 por su vinculación con el PCE, a pesar de que este partido llevaba más de un año legalizado a nivel nacional y había podido participar en las elecciones. Las manifestaciones por la amnistía fueron realizadas por “distintos estamentos, áreas y personas [...] Es la ciudad quien la pide” hasta que el propio ayuntamiento de Hellín aprobó a finales de 1976 la petición de “amnistía para presos y exiliados políticos”¹²¹. La petición de

¹¹⁹ Alba Díaz-Geada, “Comunes, conflictos y democracias en el rural gallego contemporáneo. Apuntes para una reflexión”, en *El disputado voto de los labriegos*, ed. Daniel Lanero (Granada: Editorial Comares, 2018): 106-107.

¹²⁰ Óscar J. Martín García, “<<Un deprimido trozo de España>>. La lucha por la democracia en una provincia subdesarrollada”, en *La Transición se hizo en los pueblos: el caso de la provincia de Albacete*, coord. Manuel Ortiz Heras (Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 2016): 196-197.

¹²¹ Óscar J. Martín García, “<<Un deprimido trozo de España>>. La lucha por la democracia en una provincia subdesarrollada”, en *La Transición se hizo en los pueblos: el caso de la provincia de Albacete*, coord. Manuel Ortiz Heras (Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 2016): 183-186; y Damián A. González Madrid y Óscar J. Martín García, “Desde abajo y en la periferia del desarrollismo. Cambio político y conflictividad social en La Mancha, 1962-1977”, en *El Franquismo y la Transición en España. Desmitificación y reconstrucción de la memoria de una época*, coord. Damián A. González Madrid (Madrid: Catarata, 2008): 147-148.

amnistía política, laboral y educativa aglutinó a todos los movimientos antifranquistas y consiguió gran popularidad entre la sociedad civil porque se consideraba como una reivindicación democrática esencial para dejar atrás la dictadura. Fue tal su potencia movilizadora que el gobernador civil de Albacete mostraba su preocupación porque “el tema de la amnistía [...] ha sido el punto más avivado y utilizado como bandera para la celebración de manifestaciones más o menos públicas, o de actos encubiertos, amparados en la condición de culturales, de conferencias científicas, etc”. Esto provocó que incluso dentro de los sectores del franquismo se debatiese el tema. En Albacete, organizaciones como Fuerza Nueva o la Asociación de Amas de Casa se mostraron favorables a una amnistía que dejase fuera los delitos de sangre y los actos terroristas, pero otros sectores mostraron claramente su repudio. En enero de 1976, un concejal del ayuntamiento de Hellín amenazó con presentar la dimisión si se seguía tratando dicho tema en esta institución¹²². Con todo esto, se puede ver como el control de las autoridades reformistas sobre el espacio local fue muy severo para impedir el desborde del proceso democratizador. Consecuencia de esto también fue el retraso consciente de las primeras elecciones municipales. Según Damián A. González Madrid, el gobierno de Suárez retrasó las elecciones municipales en 1976 por el recuerdo de abril de 1931 en un contexto de gran movilización social. Finalmente, la fecha se decidió para el 3 de abril de 1979 para poder aprovechar el rédito político que se esperaba conseguir con la victoria en las generales del 1 de marzo¹²³.

Santos Juliá afirma que, excepto por el hecho de que no fue dirigido por la oposición, el proceso de cambio político entre 1975 y 1977 siguió las líneas de rupturas defendidas por la oposición¹²⁴. Esta afirmación, aunque no sea rotundamente falsa, no parece ajustarse a la compleja realidad cuando el análisis se aproxima al estudio local del espacio rural. En este espacio se evidenciaron múltiples actos antidemocráticos y esfuerzos continuistas a lo largo de toda la década de los setenta con el mantenimiento de alcaldes franquistas en el poder y el aplazamiento de las

¹²² Óscar J. Martín García, *A tientas con la democracia. Movilización, actitudes y cambio en la provincia de Albacete, 1966-1977* (Madrid: Catarata, 2008), 212-215.

¹²³ Damián A. González Madrid, “La definición del cambio. Contienda política, represión y control institucional en la provincia de Albacete (1977-1979), en *La Transición se hizo en los pueblos: el caso de la provincia de Albacete*, coord. Manuel Ortiz Heras (Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 2016): 56-59.

¹²⁴ Santos Juliá, “En torno a los proyectos de Transición y sus imprevistos resultados”, en *La Transición, treinta años después*, ed. Carme Molinero (Barcelona: Ediciones Península, 2006), 78-79.

elecciones municipales. La continuidad de cargos franquistas en las alcaldías después de 1979 fue muy elevada y así lo señalan magistralmente Daniela Fernández Pérez y Daniel Lanero para el caso gallego¹²⁵. Se aprovecharon las redes clientelares que se habían ido creando durante casi cuarenta años de dictadura y que siguiesen en el cargo hasta 1979 les permitió fidelizar posteriores votantes mediante medidas concretas. Además, las elecciones municipales del 3 de abril de 1979 sufrieron gran número de irregularidades que fueron denunciadas gracias a los esfuerzos de los militantes de las organizaciones democráticas. Antonio Herrera González Molina recoge algunas de estas prácticas como la falta de papeletas de algunos partidos, la entrega de sobres ya cerrados, la retirada de carnés de identidad a ancianos bajo la excusa de necesitarlos para actualizar sus pensiones, el uso indebido de instalaciones públicas con fines partidistas por parte de los alcaldes, etc. Por tanto, la democracia no llegó automáticamente al mundo rural con la celebración de las primeras elecciones y esta tuvo que construirse mediante la práctica, la negociación y el enfrentamiento entre los antiguos poderes y los nuevos movimientos de presión democráticos. La Federación socialista, por ejemplo, elaboró manuales electorales dónde se explicaban los criterios, normas y bases de funcionamiento del proceso electoral y dónde se avisaba de los posibles riesgos de fraude electoral para que los vecinos pudiesen saber qué tenían que hacer para ejercer su derecho al voto tras cuarenta años de dictadura. El mundo rural constituye así un marco de gran valor donde se pueden apreciar las dificultades que surgen al intentar normalizar las relaciones de poder tras años de falta de libertad y de usos clientelares¹²⁶. Pero a pesar de todas las limitaciones y deficiencias, parece correcto afirmar que durante la Transición se construyó y se fortaleció una cultura democrática que poco tenía que ver con el pasado franquista. Sí es cierto que fueron muchas las continuidades en puestos de responsabilidad políticos, económicos, informativos, etc, pero aquellos que siguieron en sus puestos no pudieron hacerlo de la misma manera:

¹²⁵ Sobre continuidad en los ayuntamientos gallegos: Daniel Lanero Táboas y Daniela Ferrández Pérez, “El arte de saber durar... Sobre la continuidad de los poderes locales en la Galicia rural entre Franquismo y democracia (1973-1979)”, *Historia Política* 40 (2018): 331-362; y Daniela Fernández Pérez y Daniel Lanero Taboas, “Adaptarse o desaparecer: estrategias de consolidación de los poderes locales franquistas en la Galicia de la Transición”, en *Por surcos y calles. Movilización social e identidades en Galicia y País Vasco (1968-1982)*, ed. Daniel Lanero (Madrid: Catarata, 2013): 43-65.

¹²⁶ Antonio Herrera González de Molina, “<<Otra lectura de la Transición española es posible>>. La democratización del mundo rural (1975-1982)”, *Ayer* 74 (2009): 229-237.

“No valía ya solo con imponer, había que convencer. De este modo, organizaciones y partidos nutridos del régimen asumieron (con una mayor o menor dosis de fingimiento o sinceridad según los casos) el discurso democrático, defendieron sus principios y se acomodaron a los nuevos repertorios, sin por ello dejar de sacar partido de lo que pervivía de dinámicas y lealtades previas”¹²⁷.

Con las elecciones se impusieron nuevas formas de legitimarse que obligaban a prestar atención a nuevas formas de actuar más democráticas y a nuevos sujetos que ahora eran el sustento del poder. Por ejemplo, en el mundo rural se introdujeron nuevos valores de responsabilidad política en el manejo de los fondos públicos gracias a que las organizaciones agrarias progresistas insistieron en reclamar el control y la gestión de los fondos destinados al Empleo Comunitario para acabar con la arbitrariedad con la que los habían usado los antiguos poderes locales¹²⁸. Además, se hizo necesario atender a nuevos sujetos como las mujeres, percibidas como sujeto político gracias a la expansión feminista de la década previa, que ahora podían votar y decidir quién gobernaba. Por esto, la trayectoria del movimiento feminista español durante la Transición estuvo tan estrechamente vinculado al cambio político, pues todas las organizaciones entendían que la igualdad solo era posible en un contexto democrático¹²⁹. Ante esta previsión de cambio también fue común la figura del alcalde franquista que se mostró descontento y deseoso de elecciones para intentar alejarse de una postura continuista frente a su posterior electorado. En 1977 el alcalde de Bocos (Burgos) escribía al gobierno civil recordando que había intentado dimitir el año pasado y que se le “convenció para que siguiera hasta el día de las elecciones, que iban a tardar a lo sumo dos o tres meses, con lo que acepté, pero parece que esto se va prorrogando demasía” y en 1978 los intentos de dimisión de regidores rurales se

¹²⁷ Ana Cabana Iglesia y Alba Díaz-Geada, “Más allá de un baile de papeletas: acción colectiva, sindicalismo democrático y comportamiento electoral en la Galicia rural de la Transición”, en *Por surcos y calles. Movilización social e identidades en Galicia y País Vasco (1968-1982)*, ed. Daniel Lanero (Madrid: Catarata, 2013): 59.

¹²⁸ Antonio Herrera González de Molina, “<<Otra lectura de la Transición española es posible>>. La democratización del mundo rural (1975-1982)”, *Ayer* 74 (2009): 230.

¹²⁹ Daniela Fernández Pérez, “<<No queremos ser solo un voto>>: movimiento feminista y partidos políticas en las elecciones”, en *El disputado voto de los labriegos*, ed. Daniel Lanero (Granada: Comares, 2018): 72.

multiplicaron. Además, algunos alcaldes abrieron sus plenos al público en gesto de transparencia y favorecieron el debate libre¹³⁰.

Con la democratización a nivel nacional y local se redujeron los niveles de protesta por dos motivos principalmente: por la consecución de cierta parte de reivindicaciones políticas y de representación y por la institucionalización de gran parte de los movimientos sociales. El conflicto en torno a los Montes Vecinales en Mano Común descendió su intensidad a principios de los ochenta porque el nuevo régimen era más propicio a canalizar el descontento y permitía dar nuevas soluciones¹³¹. Además, el mejor ejemplo de aquellos movimientos sociales que se vieron afectados por la institucionalización fueron las asociaciones de vecinos. Por un lado, muchos de sus militantes empezaron a dedicar su tiempo a la política parlamentaria y, por otro, ya no era necesario que estos movimientos ejerciesen la función sustitutiva de unas organizaciones políticas que ya eran legales. Los comunistas, pero sobre todo los socialistas, ofrecieron a los militantes del movimiento vecinal expectativas reales de cambio desde dentro de las instituciones. Ejemplo de esto es el socialista Salvador Jiménez Ibáñez, que provenía del activismo vecinal y en 1979 consiguió ser elegido alcalde de Albacete¹³². Por tanto, a pesar de los esfuerzos de las organizaciones y movimientos democráticos y de las limitaciones posteriores se puede afirmar que con la llegada de las elecciones municipales se consiguieron formas de proceder democráticas que no solo afectaron a los poderes franquistas. Los movimientos sociales y sus militantes tuvieron que adaptarse a una nueva situación que ofrecía nuevas oportunidades por unos poderes más dispuestos a escuchar y por la oportunidad de entrar en las instituciones. Pero a la vez suponía nuevos retos a su supervivencia por la pérdida de militantes fruto de la institucionalización, por la necesidad de cambiar los procesos enmarcadores fabricados durante la dictadura y

¹³⁰ Rodrigo González Martín, “Poner urnas al campo: la democratización de los ayuntamientos rurales vallisoletanos (1976-1979)”, en *El disputado voto de los labriegos*, ed. Daniel Lanero (Granada: Editorial Comares, 2018): 25-27.

¹³¹ Araceli Freire Cedeira, “El proceso de devolución de los Montes Vecinales en Mano Común: una historia de lucha social por los recursos naturales, 1968-1989”, en *Por surcos y calles. Movilización social e identidades en Galicia y País Vasco (1968-1982)*, ed. Daniel Lanero (Madrid: Catarata, 2013): 90-91.

¹³² Carme Molinero y Pere Ysàs, *La Transición. Historia y relatos* (Madrid: siglo XXI, 2018): 238; y Damián A. González Madrid, “La definición del cambio. Contienda política, represión y control institucional en la provincia de Albacete (1977-1979)”, en *La Transición se hizo en los pueblos: el caso de la provincia de Albacete*, coord. Manuel Ortiz Heras (Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 2016): 69-70.

por la desmovilización provocada por la consecución de algunas de sus reivindicaciones.

Por tanto, los movimientos sociales actuaron como agentes democratizadores durante el tardofranquismo y la Transición. A través del conflicto, obligaron a las instituciones a tener en cuenta sus preocupaciones. De esta forma estaban negociando su posición en la política pública y su relación con el Estado, estaban luchando por conseguir una posición de ciudadanía entendida como lo que “institucionaliza unas relaciones categóricas y regulares entre los súbditos y sus gobiernos”. Pero, sobre todo, los movimientos antifranquistas fomentaron o anticiparon las formas de participación democrática gracias a que favorecieron el aumento del espectro y del número de los participantes en la política pública. Y esto no lo consiguió solo el movimiento obrero ni el PCE o el PSOE, sino que fue posible gracias a toda una campaña diversa y prolongada a lo largo de más de una década que poco a poco fue generando nuevas formas de entender la política y puso en el tablero político público a actores que hasta entonces estaban recluidos en la clandestinidad¹³³.

3. CONCLUSIONES

A lo largo de todo este trabajo se ha pretendido subrayar lo necesario de una perspectiva “desde abajo” para los estudios de historia social. Una perspectiva “desde abajo” se centra en poner el foco en sujetos anónimos que se unen para intentar defender sus intereses generalmente frente a otros grupos. En el caso del tardofranquismo y la Transición española es evidente el peso que tienen las organizaciones y movimientos sociales en el paso de la dictadura a la democracia. Aunque los poderes continuistas y reformistas presionaron y usaron las herramientas estatales para defender sus intereses, la presión de la sociedad civil y de los movimientos antifranquistas fue clave para el cambio de régimen. Además, centrarse en los espacios rurales supone un enfoque relativamente innovador que evidencia que la conflictividad social en los sesenta y los setenta no fue un fenómeno exclusivamente obrero y urbano, sino que las comunidades rurales actuaron con dinámicas y lógicas propias para defender sus intereses. Para responder a los objetivos planteados en la

¹³³ Charles Tilly y Lesley J. Wood, *Los movimientos sociales 1768-2008. Desde sus orígenes a Facebook* (Barcelona: Crítica, 2013): 249-276.

Introducción se ha atendido a la estructura de oportunidad política, la estructura de movilización y los procesos enmarcadores. Estos conceptos son fruto del esfuerzo teórico de sociólogos de las nuevas teorías del conflicto social como Charles Tilly, Dough McAdam, John D. McCarthy, Mayer N. Zald o Sidney Tarrow entre otros.

En las décadas de los sesenta y los setenta se abrió el marco de oportunidad política gracias a la crisis del régimen franquista. Esto fue aprovechado por todo tipo de movimientos sociales para intentar conseguir mejoras en sus formas de vida mediante la acción directa. Con esto, los movimientos más avanzados ampliaban al mismo tiempo el marco de oportunidad, pues una vez que afrontaban los riesgos iniciales abrían el campo de la protesta para otros actores. Pero la contestación social al franquismo en forma de protesta no fue algo exclusivo de las grandes ciudades ni de los centros industriales. También en las zonas rurales se dio un repunte de la movilización social y de la protesta antifranquista. El conflicto en torno al rechazo a la instalación de Celulosas de Pontevedra S.A., en la localidad de Lourizán, permite que ver claramente la importancia de la estructura de oportunidad para el éxito o fracaso de la movilización. Entre 1956 y 1959 las mariscadoras optaron por combinar el recurso a la vía legal y a la acción directa, pero la intervención represiva de la armada imposibilitó el éxito “desde abajo” y las reivindicaciones se canalizaron muy rápidamente “desde arriba” por parte de lobbies económicos o entidades provinciales. El alto grado de institucionalización nos da una pista sobre los estrechos límites para la práctica de la acción contenciosa en este contexto. En cambio, las protestas de la década de los setenta realizadas por los afectados por la Autopista del Atlántico en Vilaboia y Salcedo se vieron favorecidas por el apoyo de aliados externos influyentes y por un contexto de crecimiento y articulación acelerado tanto de la sociedad civil como de la opinión pública, lo que les permitió conseguir un relativo éxito gracias a la acción directa y la presencia en los medios¹³⁴. Por tanto, el nuevo marco de oportunidades aseguró una mayor probabilidad de éxito a aquellos que se atrevían a protestar, lo que a su vez aumentaba el número de aquellos dispuestos a hacerlo.

Atendiendo a los actores y formas de protesta en el mundo rural se puede afirmar que en estos espacios se desarrollaron lógicas y motivaciones propias que no

¹³⁴ Daniel Lanero, “Entre dictadura y democracia: la conflictividad socioambiental en las Rías Baixas (1959-1980)”, en *Por surcos y calles. Movilización social e identidades en Galicia y País Vasco (1968-1982)*, ed. Daniel Lanero (Madrid: Catarata, 2013): 144-164.

respondían a una agenda marcada por organizaciones ni fuerzas de ámbito nacional. Los actores nacionales que quisieron implantarse en el campo tuvieron que elaborar unos procesos enmarcadores que fuesen atractivos para los vecinos y trabajadores de estas provincias. Un ejemplo claro es la reivindicación por parte del PCE y del PSOE de la reforma agraria como forma de conectar con una demanda tradicional del campo español. Además, mientras que estos actores tuvieron bastante éxito en su implantación, durante el tardofranquismo el PCE y en la Transición el PSOE, es relevante el caso de la CNT por evidenciar la situación opuesta. Este sindicato es un claro ejemplo de cómo una combinación de estructura de oportunidad desfavorable con procesos enmarcadores y estructuras organizativas poco eficaces puede suponer la marginación de un proyecto. Su maximalismo discursivo y su apoliticismo revolucionario no encajaron bien en un contexto de revalorización de la democracia parlamentaria después de décadas de dictadura. Además, su autoexclusión del proceso, rechazando participar en las plataformas legales de acción sindical, no les ayudó a llegar a sus potenciales militantes. Por otro lado, aunque las ramas rurales de los sindicatos de clase nacionales consiguiesen tener fuertes apoyos en los espacios rurales, esto no significó que los habitantes del campo se adscribiesen a sus proyectos de forma pasiva y sin ambiciones propias. Los campesinos y trabajadores del campo entraron en estas organizaciones porque les permitía resolver problemas que afectaban a su cotidianeidad más inmediata gracias a la oportunidad organizativa que suponían. Además, si se pretende hacer una radiografía adecuada de la conflictividad en el campo en estos años no se puede atender exclusivamente a estas organizaciones externas. Es necesario prestar atención a los actores de las propias comunidades rurales como los sindicatos locales, los trabajadores sin sindicarse, la prensa local o la comunidad rural como espacio de experiencias comunes. Estos actores también aportaron enormes esfuerzos a la conflictividad social y al proceso de democratización. En cuanto a los repertorios empleados se emplearon mecanismos de protesta muy variados según diversos factores como la oportunidad o la capacidad organizativa. Las formas de descontento subterráneas, lo que James Scott denomina “armas de los débiles”, y las redes de sociabilidad informales pusieron las bases para que con la apertura de una estructura de oportunidad más favorable en la década de los sesenta hubiese una base social dispuesta a movilizarse. En este nuevo contexto aparecieron nuevos repertorios como tractoradas o encierros, pero esto no supuso

que se dejasen de emplear aquellos tradicionales que seguían funcionando como el impago de impuestos o el envío de cartas a las autoridades. Por tanto, como ya se ha anunciado, queda claro que desde el campo se formularon modelos de protesta propios que respondieron principalmente a las preocupaciones y motivaciones de las propias comunidades y sus vecinos.

Frente a la pregunta de si la protesta rural fue una forma de oponerse al Franquismo y si contribuyó al proceso de democratización “desde abajo”, la respuesta es claramente afirmativa. A las luchas sociales y económicas de la década de los sesenta se unieron reivindicaciones de libertad y democracia en la década de los setenta. Incluso en aquellos conflictos que pudiesen parecer estrictamente materiales o de subsistencia, como el que giraba en torno al pago de la cuota empresarial de la Sociedad Social Agraria, tuvieron la capacidad de agrupar las exigencias democratizadoras articuladas por los actores antifranquistas. Se desarrollaron así gran número de luchas que agrupaban demandas sociales y políticas. En muchas ocasiones estos conflictos se iniciaban exclusivamente como formas de intentar solucionar una situación material percibida como injusta por un grupo de personas, pero rápidamente se extendía y se convertía en político por la naturaleza del Franquismo, que no permitía ningún tipo de oposición directa abierta. Por tanto, las manifestaciones y huelgas antirrepresivas y de solidaridad fueron muy numerosas incluso después de la muerte de Franco. También las propias formas organizativas empleadas por muchos de estos movimientos sirvieron de aprendizaje democrático a sus militantes. Con el gobierno de Arias Navarro la cruenta represión y la falta de democracia siguieron estando a la orden del día y la amnistía fue una de las principales demandas de la oposición. Gracias al empuje de los movimientos sociales en las calles el gobierno fue sustituido por uno nuevo de tinte reformista liderado por Adolfo Suárez. Aun así, la democracia no llegó al ámbito local hasta abril de 1979. Además, la continuidad de figuras políticas provenientes del Franquismo y las limitaciones denunciadas por las fuerzas antifranquistas no fueron casos minoritarios. Pero, de todos modos, los nuevos poderes tuvieron que adaptarse a unas formas de actuar nuevas y democráticas porque la legitimidad ya no residía en un pequeño grupo de élites orgánicas, sino que si querían ser elegidos tenían que tener la capacidad de convencer a sus votantes.

No se puede entender la democratización española sin tener en cuenta los esfuerzos de los actores antifranquistas en los sesenta y los setenta. Aunque no fueron los únicos, los movimientos sociales actuaron como un actor protagónico en la pugna democracia-dictadura. Tampoco se puede dejar de lado el campo español, que es el gran olvidado de muchos de los estudios sobre el tardofranquismo y la Transición. Como afirma Óscar Martín García con gran acierto, no fue hasta que la movilización se expandió al ámbito rural que existió la capacidad para generar un empuje democratizador a nivel nacional. Aun así, este trabajo ha presentado muchos otros temas que reclaman ser ampliados mediante trabajos de investigación posteriores. Se ha pretendido que sobresaliese la idea de que los vecinos rurales y campesinos no participaron en sindicatos y partidos políticos solo porque les convenciesen sus programas de máximos, sino que usaron estas plataformas como vehículos para resolver sus preocupaciones concretas. Aunque queda claro que existió colaboración, no parece que sea tan fácil encontrar en la bibliografía casos de rechazo de las comunidades rurales a estas organizaciones ¿Hubo choques en según que zonas entre vecinos y organizaciones porque los primeros rechazaban la actividad de los segundos? ¿Fue este repudio fruto de un rechazo ideológico o fue motivado porque las comunidades rurales no querían que organizaciones ajenas liderasen luchas que consideraban que les correspondían a ellos? En cuanto a la continuidad de alcaldes y concejales franquistas en muchos ayuntamientos, se ha avanzado en este trabajo que fue un fenómeno recurrente en provincias como Galicia. Este fenómeno ha sido estudiado por Daniel Lanero y Daniela Fernández Pérez, pero todavía queda mucho por trabajar en esta línea. Un trabajo de investigación más profundo podría abordar cualitativamente cómo estas personalidades franquistas se adaptaron a un nuevo contexto democrático. Hasta qué parte les fueron útiles sus viejas redes clientelares y qué nuevas formas tuvieron que desarrollar para convencer a un electorado que a partir de ese momento era el que legitimaba su cargo. Por tanto, queda claro que el estudio del paso de la dictadura a la democracia y cómo esto afectó a las zonas rurales todavía tiene muchas zonas oscuras que necesitan de trabajos que aporten claridad.

4. BIBLIOGRAFÍA

Baby, Sophie, Olivier Campagno y Eduardo González Calleja (eds.) (2009). *Violencia y transiciones políticas a finales del siglo XX. Europa del Sur – América Latina*. Madrid: Casa de Velázquez.

Bascañán Añover, Óscar (2009). *Campesinos rebeldes. Las luchas del campesinado entre la modernización y la globalización*. Madrid: Catarata.

Berzal de la Risa, Enrique (2007). Católicos en la lucha antifranquista. Militancia sindical y política. *Historia del presente* 10 (2): 7-24.

Cabana, Ana et al (2013). Dinámicas políticas de la sociedad rural gallega: entre la agonía de la dictadura y la implantación de la democracia (1970-1978). *Historia del presente* 21: 123-144.

Cabana, Ana y Daniel Lanero (2009). Movilización social en la Galicia rural del Tardofranquismo (1960-1977). *Historia Agraria* 48 (agosto): 111-132.

Casquete Badallo, Jesús María (2001). Nuevos y viejos movimientos sociales en perspectiva comparada. *Historia y política* 6: 191-216.

De Miguel Álvarez, Ana (2004). Nuevos conflictos sociales, nuevas identidades sociales. La lucha por el reconocimiento. *TABANQUE* 18: 11-30.

Domènech Sampere, Xavier (2002). El cambio político (1962-1976) Materiales para una perspectiva desde abajo. *Historia del presente* 1: 46-67.

- (2004). El cambio político desde abajo (1962-1976). *Mientras tanto* 90: 53-70.

Foweraker, Joe (1990). *La democracia española. Los verdaderos artífices de la democracia en España*. Móstoles: Arias Montano Editores.

Gómez Bravo, Gutmaro (coord.) (2009). *Conflicto y consenso en la Transición española*. Madrid: Editorial Pablo Iglesias.

González Calleja, Eduardo (2009). Charles Tilly, From Mobilization to Revolution. *Cuadernos de Historia Contemporánea* 31: 343-363.

González Madrid, Damián A. y Óscar J. Martín García (coords.) (2008). *El Franquismo y la Transición en España. Desmitificación y reconstrucción de la memoria en una época*. Madrid: Catarata.

Halbwachs, Maurice (1995). Memoria colectiva y memoria histórica. *Revista española de investigaciones sociológicas* 69: 209-222.

Herrera González de Molina, Antonio (2009). <<Otra lectura de la Transición es posible>>. La democratización del mundo rural (1975-1982). *Ayer* 74: 219-240.

Juliá, Santos (2003). Echar al olvido. Memoria y amnistía en la transición a la democracia. *Claves de Razón Práctica* 129 (enero): 104-125.

- (2010). Cosas que de la Transición se cuentan. *Ayer. Revista de Historia Contemporánea* 79 (3): 297-319.

- (2017). *Transición*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.

Lanero Táboas, Daniel y Daniela Fernández Pérez (2018). El arte de saber durar... Sobre la continuidad de los poderes locales en la Galicia rural entre Franquismo y democracia (1973-1979). *Historia Política* 40: 331-362.

Lanero, Daniel (ed.) (2013). *Por surcos y calles. Movilización social e identidades en Galicia y País Vasco (1968-1982)*. Madrid: Catarata.

- (ed.) (2018). *El disputado voto de los labriegos*. Granada: Editorial Comares.

López Villaverde, Ángel Luis, Alfonso Botti y Julio de la Cueva Merino (coords.) (2005). *Clericalismo y asociacionismo católico en España de la Restauración a la Transición: un siglo entre el palio y el consiliario*. Universidad de Castilla-La Mancha: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Lorenzo Cadalso, Pedro Luis (2001). *Fundamentos teóricos del conflicto social*. Madrid: Siglo XXI.

Martín García, Óscar J (2006). <<Este banco me debe dinero>> Protesta, identidades y oportunidades en el sector de la banca albacetense en los años sesenta. *Pasado y memoria. Revista de Historia Contemporánea* 5: 135-148.

- (2006). *Albacete en Transición. El ayuntamiento y el cambio político, 1970-1979*. Albacete: Instituto de estudios albacetenses "Don Manuel Juan".

- (2008). *A tientas con la democracia. Movilización, actitudes y cambio en la provincia de Albacete, 1966-1977*. Madrid: Catarata.

- (2008). Entre la política, la economía y el discurso. La protesta contra la dictadura franquista en la provincia de Albacete, 1970-1976. *Historia Contemporánea* 36: 193-218.
- (2010). Oportunidades, amenazas y percepciones colectivas en la protesta contra el franquismo final, 1973-1976. *Historia social* 67: 51-67.

McAdam, Doug, Sidney Tarrow y Charles Tilly (2005). *Dinámicas de la contienda política*. Barcelona: editorial hacer.

McAdam, Dough, John D. McCarthy y Mayer N. Zald (eds.) (1999). *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*. Madrid: Ediciones Istmo.

Molinero, Carme y Pere Ysàs (2018). *La Transición. Historia y Relatos*. Madrid: Siglo XXI de España Editores.

Molinero, Carme (ed.) (2006). *La Transición, treinta años después*. Barcelona: Ediciones Península.

Ortega López, Teresa María y Francisco Cobo Romero (eds.) (2001). *La España rural, siglos XIX y XX. Aspectos políticos, sociales y culturales*. Granada: Editorial Comares.

Ortega López, Teresa María (2005). La protesta en el Sur, conflictividad laboral y oposición sindical en Andalucía bajo la dictadura franquista, 1958-1975. *Revista de estudios regionales* 72: 113-140.

Ortiz Heras, Manuel (coord.) (2016). *La Transición se hizo en los pueblos: el caso de la provincia de Albacete*. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva.

Ortiz Heras, Manuel, José Antonio Castellanos López y Óscar José Martín García (2007). Historia social y política para una Transición. El cambio desde abajo y la construcción de una nueva autonomía: Castilla-La Mancha. *Historia Actual Online* 14 (otoño): 115-126.

Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Rafael y Mónica Fernández Amador (eds.) (2017). *Movimientos sociales e instituciones locales en la Transición. La lucha por la democracia en la Andalucía rural*. Madrid: Catarata.

Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Rafael (coord.) (2007). *Historia de la Transición en España. Los inicios del proceso democratizador*. Madrid: Biblioteca Nueva.

- (coord.) (2011). *La sociedad española en la Transición. Los movimientos sociales en el proceso democratizador*. Madrid: Biblioteca Nueva.
- Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Rafael, Luis Carlos Navarro Pérez y Carmen Risa García Ruíz (coords.) (2007). *El papel de los medios de comunicación*. Almería: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería.
- Sastre García, Cayo (1997). *Transición y desmovilización política en España (1975-1978)*. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico – Universidad de Valladolid.
- Soto Carmona, Álvaro (2005). *Transición y cambio en España 1975-1996*. Madrid: Alianza Editorial.
- (2017). Los pactos en las transiciones democráticas. España: 1975-1982. *Aportes: revista de historia contemporánea* 97: 221-243.
- Tarrow, Sidney (2004). *El poder en movimiento*. Madrid: Alianza Editorial.
- (2012). *El poder en movimiento*. Madrid: Alianza Editorial.
- Tilly, Charles y Lesley J. Wood (2013). *Los movimientos sociales 1768-2008. Desde sus orígenes a Facebook*. Barcelona: Crítica.
- Tilly, Charles (1992). *Coerción, capital y los estados europeos 990-1990*. Madrid: Alianza Editorial.
- (1995). *Las revoluciones europeas 1492-1992*. Barcelona: Crítica.
- (2007). *Contienda política y democracia en Europa 1650-2000*. Barcelona: hacer editorial.
- (2007). *Violencia colectiva*. Barcelona: hacer editorial.
- Tusell, Javier y Álvaro Soto Carmona (eds.) (1996). *Historia de la Transición (1975-1986)*. Madrid: Alianza Editorial.
- Ysàs, Pere (2007). ¿Una sociedad pasiva? Actitudes, activismo y conflictividad social en el franquismo tardío. *Ayer* 68 (4): 31-57.